



La desnacionalización de la banca: fraude institucionalizado

Por Alfonso Moro

Antes de que concluyera el primer periodo de sesiones de la LII legislatura, el 27 de diciembre, el gobierno de Miguel de la Madrid decidió hacer el mejor de los regalos a los rucien expropiados banqueros. Estos podrán poseer hasta el 14 por ciento de las acciones de las que ahora se denominan sociedades nacionales de crédito y que hasta el 30 de agosto pasado todos conocimos como banca privada.

Una buena parte de la burguesía financiera del país regresa a los bancos en donde durante décadas amasó enormes fortunas y, si bien es cierto que vuelve como accionista minoritaria, entrará a su favor una serie de factores importantes. En primer lugar, la deuda que tenía contraída hasta agosto pasado —equivalente a 8 mil millones de dólares— ha sido absorbida en los hechos por el gobierno mexicano, el cual se ha comprometido, como reiteradamente ha señalado el propio De la Madrid, a cubrir hasta el último centavo de los pasivos comprometidos con bancos extranjeros; en segundo lugar, los banqueros no tendrán ahora concesionados en su favor

los servicios que prestan los bancos, pero como contrapartida, al actuar como simples accionistas, podrán salir beneficiados sin muchos riesgos de las utilidades que generen los depósitos del público —beneficios bastante elevados dadas las altas tasas de interés que rigen actualmente en los mercados de dinero—; en tercer lugar pero no menos importante, está el hecho de que la concentración de capitales es alentada por el gobierno mexicano, lo que significa que sólo unos cuantos podrán tener acceso a la participación en las acciones y que parte de la competencia que anteriormente se daba por parte de los pequeños bancos —no por pequeños, menos depredadores— ha sido eliminada; finalmente, bajo una óptica eficientista y rentable del sistema crediticio, al poner en venta el 34 por ciento de las acciones el gobierno de De la Madrid quiere devolver a la burguesía, tanto del país como internacional, la "confianza", es decir, la garantía de que se velará por los intereses de los sectores más poderosos del capital, de aquellos que muestren que pueden salir de la grave crisis que se vive actualmente.

Pasa a la página 3

Última hora

Un nuevo paso en la desnacionalización de la banca

El día 12 de enero, los periódicos anunciaron que se otorgó amparo a los accionistas privados de Seguros La Azteca y Seguros Atlántico contra la nacionalización. Para mayor colmo de la actitud entreguista del gobierno, es la Secretaría de Hacienda la que otorga el amparo. ¿Cuál será el destino de los amparos? Simplemente hay que recordar que en octubre del año pasado, cuando muchos creían muy seguros la nacionalización de la banca y el control de cambios, el juez Polo de la Ciudad de México otorgó amparo a dos cuentahabientes contra el control de cambios. Semanas después, el gobierno de De la Madrid lo levantó.

Capítulo económico de la Constitución: avance de la burguesía

Por Ricardo Pascoe

La propuesta presidencial de agregar a los artículos constitucionales 16, 25, 26, 27, 28 y 73 el Capítulo Económico no es un hecho aislado, sino parte integrante de un proyecto político-económico para solucionar la crisis que vive el país. Por lo menos esa es la explicación que da el régimen, al justificar las medidas como "duras pero necesarias". Al parecer existen grandes orientaciones en el Capítulo Económico, que sirven de fundamento a las propuestas

específicas: la primera se refiere a la necesidad de reeditar el papel rector del estado en la economía nacional, mientras la segunda "abre" sectores económicos a la inversión privada, ya sea directamente o asociada con el estado.

De entrada existe una gran contradicción entre las dos orientaciones: o se es rector, como estado, o se deja el campo abierto a la inversión privada. En efecto, la ambivalencia de la iniciativa, ya ley, se deja

ya ver. Se reitera el papel rector en la economía del estado mexicano y se precisan los sectores o áreas estratégicas de la economía en donde puede actuar exclusivamente el estado. Sin embargo, y en congruencia con otra iniciativa de ley, el estado ya no tiene acceso exclusivo al servicio de la banca y crédito. O sea, se precisó el papel del estado en la economía, y resulta que es un papel menor al que tenía antes de las reformas constitucionales.

Pasa a la página 3

Ante el nuevo gobierno:

El reto es la unidad del movimiento de masas

Por Arturo Angulano

Bastaron solamente 30 días de gestión del nuevo gobierno encabezado por Miguel de la Madrid para que quedara definitivamente zanjada la discusión, en el seno de la izquierda y del movimiento de masas, sobre el carácter de la política de austeridad y la prioridad de la lucha contra ella. En efecto, el nuevo gobierno ha llevado hasta el límite todos los elementos de la política de austeridad puestos en práctica con especial dureza desde la devaluación de febrero. Con ello desechó cualquier concesión que relegitimara cierto populismo e, incluso, se deslizó por el camino de la desnacionalización de la banca, lo que volatiliza los aires nacionalistas de septiembre y destruye las ilusiones reformistas de "reorientación democrática de la economía".

La avalancha de iniciativas y proyectos de ley que el presidente dejó caer sobre las cámaras configuró una situación clara de ofensiva generalizada y, sin medida contra las condiciones de vida y de trabajo del pueblo, de definición prepotente y arrogante de una política de salida a la crisis nitidamente capitalista y sin concesiones. Las conquistas laborales de los dife-

rentes sectores de trabajadores y algunos derechos democráticos, como la libertad de expresión, se encuentran en la mira, como lo prueba la legislación referente a los "servidores públicos" y al "daño moral".

La crisis social

Pero los primeros 30 días del nuevo gobierno no solamente han dejado claro el carácter profundo y a largo plazo de la política de austeridad y su decisión de recobrar la confianza de los grandes burgueses atomizados por la nacionalización de la banca, sino igualmente han mostrado la honda crisis social por la que se desliza el país, en la cual aquella política provoca irritación y descontento de distintos sectores sociales antes apáticos. Los debates sobre el "daño moral", el "delito de deslealtad", el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a libros y revistas, las modificaciones a la ley de trabajadores del estado, la desnacionalización de la banca y su conversión en banca mixta, etc., revelaron una sensibilización de la llamada opinión pública que en el fondo expresa un sentimiento profundo de desconfianza y alarma de la población. El gobierno tuvo que dar marcha atrás en algunas cues-

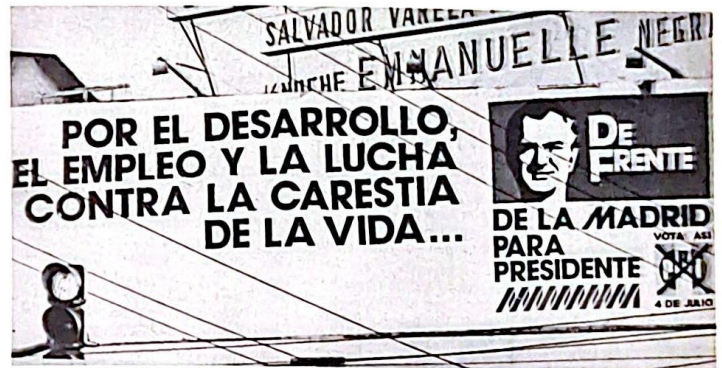
tiones, como el mencionado IVA, o matizar otras, como el "daño moral".

Esa situación ha comenzado a degradar en unas cuantas semanas el prestigio que el gobierno había logrado restarpar con las medidas del 1 de septiembre. Nunca se había iniciado un año con tan graves presagios para los trabajadores. El ridículo aumento al salario mínimo, la liberación y el disparo de los precios, la redoblada carga del IVA, configuran una situación de tremendo ataque a las condiciones de existencia y de trabajo de las masas. La caída generalizada de la producción y el recrudecimiento del desempleo masivo, igualmente, pintan negro el panorama para los que nada tienen.

Preparar la respuesta de masas

Ante esa situación los trabajadores difícilmente podemos quedarnos con los brazos cruzados. Incluso los charros perciben las nubes de tormenta que se gestan y por ello, aunque continúan instrumentando las medidas de austeridad del gobierno, lo hacen con recelo y advertencias sobre el peligro de estallidos sociales.

Pasa a la página 2



Sin comentarios. (Foto Cristlán Barba/BS)

Por Ulises Martínez F.

Encima de cientos de discursos, el gobierno chiapaneco adecuó los términos de la reforma política y de la conducción de los procesos electorales al imponer por la vía del fraude electoral a nuevas autoridades municipales de Villa Flores y masacrar, después, a los propios priistas conformes que, organizados en la Coalición Aytecsana de Defensa y Producción, se habían posesionado del Palacio Municipal desde el pasado 30 de diciembre.

Enfrentado contra sus mismas bases por la decisión de imponer como candidato a la presidencia municipal a Alberto Jaesy Balboa, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tuvo que acudir al fraude electoral para revertir el triunfo al candidato independiente, Mario Rosales Lasco, había obtenido el pasado 5 de diciembre.

Estos hechos motivaron que los priistas disidentes emprendieran el camino de la movilización y tomaran el palacio municipal. Junto al conato de Villa Flores, el gobernador chiapaneco, salón Castellanos Domínguez, debió enfrentar una situación generalizada de descontento entre las bases priistas que mantenían bajo su control los palacios municipales en ocho ayuntamientos. El 5 de enero pasado, el gobierno estatal optó por poner fin a esta ola de protestas a través de

uno de los actos represivos más brutales de los últimos años y el primero de esta magnitud en lo que va del sexenio.

Ese día, 300 policías rodearon el palacio municipal y obligaron a los cerca de 3 mil ocupantes a desalojarse tras agredirlos con gases lacrimógenos, ráfagas de metralleta y golpes. El saldo del ataque policiaco fue de 250 heridos, por lo menos diez muertos y un número aún no precisado de detenidos cuyo paradero, en la mayoría de los casos se desconoce.

Los agredidos señalaron al secretario general del gobierno chiapaneco, Javier Coello Trejo, como responsable de estos hechos, y al teniente José Valdés como director del operativo policiaco y de las posteriores sesiones de tortura a las que se sometió a varios de los detenidos.

De esta forma, el gobierno de Castellanos Domínguez ha revivido los métodos más primitivos de "elección" de las autoridades municipales, haciendo caso omiso de los proyectos de fortalecimiento del Municipio Libre que el gobierno federal ha anunciado.

De igual manera, estos hechos y el silencio que el gobierno federal ha guardado al respecto contradicen los planteamientos expuestos por Miguel de la Madrid desde su discurso de toma de posesión, en el sentido de profundizar durante el sexenio el proceso de reforma política y saneamiento los mecanismos de participación de la justicia.

Reagan reanuda ayuda militar a los dictadores guatemaltecos

Por Cristina Rivas

El 7 de enero, el gobierno de Estados Unidos decidió levantar, después de cinco años, el embargo militar contra Guatemala. Esto significa que el ejército guatemalteco podrá recibir equipo militar por seis millones de dólares inmediatamente, más otros cuantos millones que se le asignarían bajo el rubro presupuestal de "ayuda militar al extranjero".

El embargo norteamericano partía de que se consideraba que en Guatemala no se respetaban los derechos humanos, y su levantamiento estaba condicionado a que "mejorara" este "aspecto" de la política guatemalteca.

El departamento de Estado yanqui declaró que se encuentra satisfecho "por los avances" que en cuanto al respeto de los derechos humanos ha demostrado el gobierno del general

Efraín Ríos Montt, así como por sus promesas de "democratización".

Por si hiciera falta, esto es una muestra de qué entiende Reagan por "avances" en el respeto a los derechos humanos. El gobierno guatemalteco aceptó que en los dos últimos meses se cometieron 276 asesinatos políticos en el país, pero esto es menos de la cuarta parte de los mil 175 ocurridos durante el mismo periodo en 1981.

Sin embargo, las cifras del gobierno de Ríos Montt no son muy de fiar. Tan sólo un día antes de que Reagan levantara el embargo, la organización asistencial francesa Operación Esperanza, que opera en Guatemala, había denunciado que en el curso de 1982 la villa Xiquín Senahí había sido totalmente arrasada y sus 348 habitantes indígenas asesinados por el ejército.

Pasa a la página 7

Día internacional de solidaridad con El Salvador

¡Contra la Intervención Imperialista en el Salvador y Centroamérica!
Marcha en la Ciudad de México, el sábado 22 de enero a las 16:00 horas,
del Hemiciclo a Juárez a la Embajada de Estados Unidos.

El reto es la unidad del movimiento de masas

0 Viene de la página 1

En efecto, las próximas semanas se definen por los desplazamientos por revisión salarial y/o contractual de numerosos sindicatos en empresas de muchas de las ramas y los sectores económicos fundamentales. A pesar de que la clase obrera ha sido golpeada por los despidos masivos que los reajustes y los cierres de empresas han implicado, y no obstante el temor que los burócratas de todo tipo les han infundido en torno al supuesto dilema "salarios o empleos", los trabajado-

res no se revelaron ilusorios y mediatizadores. Los acontecimientos de las últimas semanas fueron desechando las esperanzas reformistas de "salidas democráticas a la crisis" que el CNDEP y en especial el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) enarbolaban, imponiéndose la prioridad, más que nunca urgente y viva, de desplegar la lucha coordinada contra la austeridad, es decir, contra la real salida burguesa a la crisis.

Sin embargo, el FNDSCAC sigue siendo un instrumento en

la conformación del frente regional. Lograron establecerse frentes en tres estados y promotoras en dos más, y se iniciaron trabajos en ocho ciudades. La gran marcha plantón nacional del día 27 de noviembre y la manifestación del 10 de diciembre, sin embargo, lograron reunir a importantes contingentes en lucha contra la austeridad y por demandas específicas, en una situación desfavorable por el impacto de la nacionalización de la banca y el renovamiento de las ilusiones reformistas, en auge todavía en esos días.

convergencia. Para ello urge adecuarlo, ponerlo a la altura de las tareas que tiene por delante. Los foros de discusión previstos para las próximas semanas, en particular sobre el movimiento sindical y la coyuntura nacional, debemos aprovecharlos para clarificar la situación y configurar un verdadero plan de acción que responda a las necesidades del movimiento de masas, y en general de la clase obrera y el pueblo.

En ese proceso, que necesariamente tiene que realizarse por medio de la acción coordinada de las múltiples luchas concretas, en donde podremos

crear las condiciones para sacar a la vanguardia de los trabajadores del aislamiento, en donde podremos influir para la ruptura de los grandes contingentes de trabajadores agrupados en los sindicatos nacionales, con sus direcciones sindicales propaltrones y antidemocráticas. La heterogeneidad de la clase obrera, de los diversos núcleos de trabajadores, impone distintos ritmos de movilización y de conciencia. La ruptura con los charros y el fin de las esperanzas obreras en el estado solamente podrán producirse a raíz de la acción consciente de los sectores de vanguardia, de

su capacidad para convertirse en una alternativa creíble a los ojos de cientos de miles de trabajadores.

Hoy hay que empezar a dar pasos firmes, sin sectarismo, para agrupar en forma efectiva en el FNDSCAC a todos aquellos que estén dispuestos a resistir la ofensiva burguesa de austeridad. Es de esta forma, por lo demás, como podremos ir cimentando el camino hacia la preparación de la alternativa proletaria, de la salida obrera revolucionaria a la crisis capitalista, en beneficio de los trabajadores y por obra de los trabajadores.



(Foto Bernardo Rivero/BS)

res no dejarán de expresarse en esta coyuntura. Lo harán incluso como necesidad de sobrevivencia, de defensa del mínimo vital que requieren para ellos y sus familias, de resistencia al desalojo compulsivo de su puesto de trabajo o de su lugar de residencia.

Ante una crisis capitalista tan profunda que apenas inicia su feroz embate contra el proletariado, en aras de la preservación de las ganancias patronales, el gran reto de las diversas corrientes revolucionarias y democráticas, de los sectores independientes y combativos del movimiento obrero y de masas, es el de responder con la acción unitaria. El peso de la burocracia sindical charra, y de las ilusiones y esperanzas en el estado continúa predominando en el grueso del pueblo trabajador. Pero el chamismo se encuentra desconcertado y la acción corrosiva de la crisis, aunada a la torpeza política de un gobierno de gerentes, de funcionarios claramente definidos en torno a una política anticrisis favorable al gran capital asociado y transnacional, puede contribuir a destruir esa influencia que aún garantiza al régimen la puesta en práctica de su política. De hecho, los primeros 30 días del gobierno de "racionalización capitalista" han empezado a hacerlo, al cancelarse el reanamiento del nacionalismo que la nacionalización de la banca había provocado. Fructificará esto, sin embargo, sólo si logramos avanzar en el reforzamiento de un proyecto unitario de organización y lucha, de resistencia unida y masiva a la austeridad.

Reforzar el FNDSCAC

En este camino, el Frente Nacional en Defensa del Salario, contra la Austeridad y la Carestía (FNDSCAC) es el logro más importante, y ha mostrado la validez y la vigencia de su proyecto contra otros, como el Comité Nacional de Defensa de la Economía Popular (CNDEP),

extremo débil, que a pesar de la certeza de sus objetivos no ha sido tampoco capaz de volverse una alternativa de organización y lucha unitaria. Ni siquiera ha sido capaz, como lo reconoció autocríticamente en el balance discutido en su pleno nacional del 4 de diciembre, de coordinar las movilizaciones y luchas de los contingentes que en él participan. Esta ineficiencia en parte se debió al hecho de que un sector importante de las fuerzas del frente sabotó abiertamente su acción, en beneficio del proyecto alternativo que pretendió ser el CNDEP. Pero también fue producto de la insistencia de algunas corrientes por darle al frente el carácter de foro de discusión y deslinde ideológico, en detrimento de su función de instancia unitaria, para la acción, de distintas fuerzas y, por ello, con objetivos precisos y limitados.

Pero la debilidad más importante del FNDSCAC en su corta existencia ha sido el no lograr establecer un programa de acción estructurado sobre los ejes políticos en torno a los cuales se organiza. De hecho sus actividades, en especial sus dos jornadas de noviembre, se efectuaron como una manera de ir echando lazos de unión entre movilizaciones ya programadas de luchas particulares, en especial alrededor de los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Las luchas se mantuvieron aisladas e incluso las huelgas de hambre de maestros democráticos, obreros de Acermax y Carabela, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y del Frente Nacional contra la Represión (FNCR), más que un frente único de luchas, parecían una simple coincidencia física en Catedral, sin verdaderos vínculos políticos y organizativos. La jornada nacional que debería culminar el 27 de noviembre con la integración de frentes locales tuvo resultados parciales y limitados, pues ni en el Valle de México se pudo trabajar por

La contendencia de los hechos ha ido imponiendo desde los primeros días de diciembre la necesidad de superar esa situación de aislamiento y dispersión real de las luchas incluso de los sectores más avanzados. De ello es muestra el hecho de que sectores del CNDEP han empezado a recapacitar y a orientarse hacia el reforzamiento de un solo organismo unitario. El despliegue del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) publicado el día 15 de diciembre es significativo en este sentido. Las declaraciones desilusionadas del PSUM sobre el carácter antipolítico de la política del nuevo gobierno pueden argumentar también en esta dirección. Evidentemente que, ante la imposibilidad de una alianza con el gobierno, el PSUM y los sectores que influye se ven estreñidos a rectificar para evitar el aislamiento. Así sea parcial y limitado, el cambio no debe ser respondido con el rechazo sectario, sino aprovechado para obligar a las fuerzas sindicales y políticas que esa corriente influye a que se comprometan en la práctica en la lucha contra la austeridad—que ha sido, es y será por mucho tiempo la lucha fundamental del pueblo trabajador.

Nuestro reto: la unidad

Sin que por supuesto se superen las discrepancias sobre las alternativas a la crisis, está claro que hoy el reto para todas las corrientes de izquierda y las organizaciones clasistas del movimiento es avanzar en la coordinación de los esfuerzos de movilización, en la unidad y la organización de las luchas que los distintos sectores de trabajadores entablen en defensa de sus condiciones de trabajo y vida, así como de sus conquistas y derechos. Aunque limitado y embrionario, el FNDSCAC es hoy el instrumento más importante para dar pasos firmes en ese proceso de coordinación y

¿Escala móvil de salarios?

Por Cristina Rivas

La escalada en los precios de los productos básicos ha sido tan tremenda que hasta los burócratas sindicales están "alarmados". Tratan de hacer creer a los trabajadores que el "pacto tripartita" (entre los charros, el gobierno y los patrones) ha sido roto y no se han cumplido las promesas que los empresarios hicieron a De la Madrid (El Día, 7 de enero).

A raíz de que se anunció el aumento de 25 por ciento en los salarios mínimos, la inflación—que

dar estipulado a nivel de ley para que cubra a todos los trabajadores, sindicalizados o no. El porcentaje del aumento deberá ser determinado por una comisión formada por representantes de los sindicatos y de las cámaras de diputados y senadores. El cálculo se puede realizar sencillamente, sobre el mismo paquete que el Congreso del Trabajo presentó como "canasta básica" y que incluye, además de alimentos, transporte, educación y vivienda. El porcentaje así establecido se aumentará cada mes a los salarios.



(Foto Jesús Carlos BS)

ya en el mes de diciembre había alcanzado el 10.7 por ciento mensual—cayó sobre la población trabajadora dejando chiquita a la palabra "crisis". Esta situación coloca a los jefes sindicales en una posición difícil, pues su control sobre las bases se fundamenta en, por lo menos, mantener la imagen de que defienden los intereses obreros.

El propio Fidel Velázquez, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), manifestó a la prensa nacional el 6 de enero que él y sus colegas no podrán evitar el "desborde de la clase trabajadora". Velázquez declaró también que los sindicatos del Congreso del Trabajo se podrían ver obligados a pedir que se revise nuevamente el salario mínimo.

Pero Fidel Velázquez, en realidad, no está dispuesto a luchar. En primer lugar, sigue eximiendo de responsabilidad al gobierno, como si éste no tuviera casi nada que ver en el aumento y no fuera quien está tomando las medidas que tanto benefician a la burguesía. A lo más que ha llegado es a considerar "pertinente que se aclare con el mismo gobierno [Secretaría de Comercio y Fomento Industrial—Secofin] por qué se están autorizando más alzas" (El Día, 7 de enero). Se trata de negar el hecho de que el gobierno, así como el partido que lo detenta y al cual pertenece Velázquez, tiene como fin garantizar y promover los intereses de la patronal.

Por otro lado, recientemente tuvimos una buena muestra de qué soluciones buscan los charros. Cuando se anunció el aumento salarial del 25 por ciento, el Congreso del Trabajo afirmó que se implantaría la "escala móvil de salarios".

Esto resultó ser una mentira. En realidad se trata de una iniciativa aprobada por el Senado de la república según la cual "la revisión del salario mínimo podrá hacerse en cualquier época del año de acuerdo a las circunstancias económicas del país" (El Universal, 28 de diciembre). Los legisladores aclararon que esto no significaba una revisión cotidiana del salario, sino únicamente "cuando las circunstancias económicas y críticas así lo exijan". ¿Quién y cómo determinará cuándo sucederá eso? Nadie lo sabe.

La escala móvil de salarios es un ajuste automático ante el alza de los precios que debe que-

La razón de ser de la escala móvil es el hecho de que el aumento de los precios no tiene otra causa que la desmedida avaricia de los patrones, que en medio de la crisis logran ganancias extraordinarias sobre esa base. Los trabajadores no son los promotores de la crisis, y no tienen por qué pagar ni por ella ni por la avaricia de patrones y vampiros casatenientes.

Este planteamiento no es nuevo. Pero si antes era solamente una buena idea, ahora es una necesidad apremiante. Y es posible lograrlo. Los burócratas que dirigen los sindicatos pueden y deben ser presionados para encabezar la lucha. Ahora empiezan a sentir que el piso se les mueve, y es el momento de impulsar una demanda que no resulta muy difícil de explicar a quienes tienen que malcomer con miserables 450 pesos diarios.

Bandera Socialista

Órgano del Partido Revolucionario de los Trabajadores (Sección Mexicana de la Cuarta Internacional). Es publicado bajo la responsabilidad del Comité Político del PRT. Registro en trámite.

Director: Edgar Sánchez Ramírez. Jefe de Redacción: Rosa Amelia González. Planta de Redacción: Manuel Acosta, Roberto Iriarte, Ulises Martínez, Cristina Rivas. Fotocomposición: Bernardo Rivero, Concepción Rodríguez. Diseño: José Chávez, Mónica Manrique. Administración: Julio Dosal, Jaime Valverde. Envíos: Jorge Rodríguez.

Domicilio de la redacción y de la administración: San Antonio Abad 254, Colonia Vista Alegre, CP 06800, Teléfono: 530 28 31

Los artículos firmados no expresan necesariamente el punto de vista de esta publicación o del Comité Político del PRT. Bandera Socialista aparecerá semanalmente todos los lunes de 1983, excepto en las vacaciones de Semana Santa y de fin de año, y en la fecha que coincida con la realización de la Escuela Nacional de Cuadros del PRT. Toda correspondencia debe ser enviada a nombre del Director al Apartado Postal 111-007, México 06800, DF.

Cierre de esta edición: 12 de enero

La desnacionalización de la banca: fraude institucionalizado

Viene de la página 1

La Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito—como se llama el decreto desnacionalizador—viene a ubicarse, junto con la modificación del Artículo 28 de la Constitución, como uno de los puntos de retroceso más graves que se hayan dado en contra de la nación, en contra de los trabajadores de México. Con mucho, esta medida es más retrógrada que la reforma hecha por Miguel Alemán al Artículo 27 constitucional que abrió las puertas para que un puñado de terratenientes se apoderara de enormes extensiones territoriales, más lesiva incluso que las concesiones otorgadas a los capitales imperialistas para la venta de los derivados de hidrocarburos.

A partir de este año se reconoce constitucionalmente que la propiedad privada—el medio para explotar a millones de trabajadores—es de "interés social", y el estado queda relegado en una serie de actividades a simple supervisor y gestor de que ese "interés" se cumpla.

Aunque diversos congresos gubernamentales han tratado de convencer a la opinión pública de que no se está dando marcha atrás en la expropiación de la banca, los hechos hablan por sí solos. No solamente los banqueros participarán con un tercio de representantes en los consejos directivos de los bancos, sino que pueden estar seguros de que sus capitales estarán bien resguardados, puesto que—tal y como lo indica el Capítulo III, Artículo 39, de la citada ley—el secreto bancario se mantiene y—con las modificaciones al Código Civil que aprobó la Cámara de Diputados, incluida la fracción parlamentaria de los reformistas del Partido Socialista Unificado de México (PSUM)—aquel funcionario o empleado que viole ese secreto se hará acreedor a severas penas de carácter económico. A su vez, el Capítulo II, Artículo 7, señala que las sociedades nacionales de crédito (la banca expropiada que ahora cuenta con la participación de los ex banqueros) "...tendrán patrimonio propio...", con lo que los bienes que aquellas posean son enajenados a la nación en favor de un puñado de poderosos capitalistas. De igual forma, la llamada banca mixta (con participación del estado y de particulares), en lugar de quedar conformada como *Instituciones nacionales de crédito*—con participación absoluta del estado—, se integrará en un plazo no mayor de 180 días como sociedades nacionales de crédito, con lo que más de un tercio de sus acciones también se pondrán a la venta.

Tan sólo un mes de administración de Miguel de la Madrid ha servido para confirmar lo que nuestro partido, el Revolucionario de los Trabajadores (PRT), había indicado hace algunos meses: a saber, que este gobierno se caracterizaría por una política entreguista en favor del gran capital; que siendo un gobierno resultado del más gigantesco fraude electoral que se haya cometido, no repararía en atacar las conquistas logradas por la población mexicana, en particular por los trabajadores; y que tremenda traición cometerían aquellos que votaron en la Cámara de Diputados reconociéndolo como un gobierno legítimo. Hoy los resultados están a la vista. También ha quedado claro por qué se nos negó el derecho a estar en la cámara: el PRT no se habría conformado con tachar a las medidas desnacionalizadoras y a toda la política económica seguida hasta ahora de "brutal y burda falta de respeto", sino que habría llamado desde ahí a los trabajadores a movilizarse para defender sus conquistas.

No hay duda de que Miguel de la Madrid está dispuesto a apearse a todos los dictados que ha impuesto el Fondo Monetario Internacional, ni de que la política de austeridad va a profundizarse. En lo inmediato, nosotros alertamos a los trabajadores, campesinos, y demás explotados y oprimidos para que preparen la lucha en contra de otra medida que sin duda tratará de implementarse: la venta de las acciones de las empresas que fueron expropiadas junto con los bancos y que suman más de mil. Las acciones de las empresas que fueron expropiadas a los banqueros no deben, como ha sido el caso de las de la banca, volver a ellos. Por el contrario, hay que organizarse y exigir que ramas vitales de la producción—como la construcción, la minerometalúrgica, la metalmeccánica y la de las medicinas, donde los banqueros tienen invertidos miles de millones de pesos—sean nacionalizadas y pasen a estar bajo control obrero para evitar nuevos ataques como éste del que hemos sido testigos. El gobierno de De la Madrid está empeñado en resarcir sus ganancias a los capitalistas; toca a los trabajadores impedirlo. Al contrario de lo que establece la ley desnacionalizadora, los trabajadores de la banca deben dar a conocer a la opinión pública los nombres de los accionistas y el monto de sus inversiones, a la vez que deben denunciar toda intención de represión para tratar de acallarlos. La crisis no debemos pagarla los trabajadores. No podemos seguir permitiendo nuevas desnacionalizaciones. □

Capítulo económico de la Constitución: avance de la burguesía

Viene de la página 1

En este sentido, y a pesar de las "precisiones" legales y constitucionales, resulta que el papel del estado se ha reducido por obra propia. Además, las reformas abren nuevos tipos de "propiedad": estatal, social y privada. En la práctica, esta medida se agrega a las especificaciones de cómo establecer condiciones favorables para la inversión privada y su crecimiento. Así, y a pesar de la ambigüedad de la ley, resalta el hecho de que se exponen apoyos decisivos al desarrollo del capital privado—es, aparentemente, la preocupación fundamental de las reformas—, en claro detrimento de la participación estatal en la economía.

La ambivalencia tiene, pues, un origen político, más que económico: el hecho de afirmar que el estado sigue siendo rector en la economía nacional es demagogia necesaria, desde el punto de vista del régimen, para asegurar sus alianzas sociales, particularmente con el movimiento obrero. Pero la realidad económica es que cada día más el capital privado reina en el país. Lo primero es discurso político, mientras que lo otro es realidad económica.

En efecto, las reformas constitucionales tienen como fundamento el proceso objetivo del país: el fortalecimiento del criterio de que es mejor invertir dinero en gasto productivo y no en gasto social; de que es mejor y más benéfico para el desarrollo económico un estado menos in-



(Fotomontaje Fernando Ruiz/BS)

tervenor; de que el dinero existente debe usarse para pagar la deuda externa; y de que hoy el pueblo trabajador debe sujetarse, pues ante la crisis se avenge muchos sacrificios. Estos criterios, acordes con *Reaganomics* y la presión del imperialismo, han ganado mucho terreno. Tanto terreno, por cierto, que las medidas económicas del régimen parecen curtiduras a la medida del Fondo Monetario Internacional y Washington.

Las medidas amplían las posibilidades de inversión y penetración del capital privado en áreas anteriormente no abiertas. La figura de "propiedad social" abre un mecanismo para la inversión "conjunta" del estado y el capital privado en áreas anteriormente consideradas de reserva en exclusiva para el estado. Además, en cuanto a la propiedad privada, el estado tiene la obligación de definir y de ayudar a organizar junto con el ca-

Los primeros cuarenta días

La presentación del gobierno de Miguel de la Madrid ha sido contundente. De hecho, se ha perfilado en 40 días como el gobierno más favorable a los intereses de la burguesía privada en las últimas tres décadas.

Dos elementos resaltan como sobresalientes en los primeros pasos de De la Madrid: la rapidez con que ha atacado el mayor número de intereses de los trabajadores y la débil respuesta habida frente a estos ataques.

Del cúmulo de actos de gobierno destacan por su importancia a largo plazo la desnacionalización parcial de la banca y las reformas a la Constitución en el llamado capítulo económico de la misma. Otros actos de gobierno afectan quizá en forma más inmediata al pueblo trabajador, pero estos dos dibujan claramente la orientación de la administración de De la Madrid.

Contra todas las ilusiones reformistas, la nacionalización de la banca—hecha en frío y en función de los intereses del capital en su conjunto, pese a su carácter objetivamente progresista—pudo ser revertida (aunque sea parcialmente) en menos de cuatro meses, sin que hubieran grandes demostraciones de protesta. Ello ha demostrado cómo, pese a todo, el desprestigiado régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no logró recuperar mayor consenso social con la nacionalización de la banca.

La entrega a manos privadas del 34 por ciento de las acciones de la banca garantiza simultáneamente la utilización centralizada por el estado de los recursos financieros y el mayor beneficio para los capitalistas privados—derivado esto último del hecho de que, aun sin ser concesionarios de servicios públicos, éstos sí pueden obtener jugosas ganancias e influir en la orientación de la propia banca.

La modificación de la tesis constitucional sobre la propiedad en el sentido de que el estado debe alentar el desarrollo de la propiedad privada simplemente viene a formalizar lo que ha constituido la norma del gobierno de De la Madrid. Ha sido modificada la concepción que se plasmó en la Constitución del '17—limitada y todo, pero heredada de la Revolución Mexicana—de que la propiedad está sujeta siempre al interés nacional.

Pero lo más grave de la situación se ubica en el grado de capacidad de respuesta. De algún modo, la orientación de De la Madrid estaba delineada desde la propia campaña electoral. Lo terrible es que la respuesta frente a estas agresiones ha sido todavía muy pobre, dando la impresión de que más bien priva el desconcierto.

Sólo sectores más organizados, pero marginados a la clase obrera, han podido responder a algunas agresiones, especialmente en cuanto a las libertades democráticas. Este fue el caso de la "ley obscena" Lópezportillista, que fue objeto de gran repulsa. La división de las fuerzas democráticas con motivo de la "ley de la mordaza" dificultó más el combate contra dicha iniciativa, ésta sí de De la Madrid. La principal responsabilidad les cabe aquí a la representación parlamentaria y a la dirección del PSUM, que la justificaron. Junto con su apoyo a las reformas a la Ley Federal del Trabajo en la pasada legislatura, cargan ahora con una grave responsabilidad.

Pero la aprobación de esta ley tiene otro aspecto ominoso. Aparentemente el gobierno de De la Madrid, consciente de las presiones sociales que generaría la aplicación de su política económica, se orientaba por una flexibilidad mayor al nivel político. Esta ley es muestra de lo relativa que puede ser esta orientación. A ella se viene a sumar el surgimiento de lo que pueden ser los primeros tres desaparecidos—secuestrados por motivos políticos del sexenio de De la Madrid: Juan Islas, Carlos Valdés—miembros del PRT, el primero de ellos amnistiado el 1 de septiembre después de ocho años de cárcel—y Rafael Lemus.

Sin embargo, el problema de la capacidad de respuesta se hace más grave al nivel de la clase obrera. La dirección burocrática del Congreso del Trabajo ha vacilado entre el apoyo y la protesta, limitada ésta a amenazas y declaraciones. Sectores independientes del PRI y en proceso de radicalización y lucha—como los agrupados en el Frente Nacional en Defensa del Salario, contra la Austeridad y la Carestía (FNDESCAC)—continúan siendo muy marginales como para ofrecer una alternativa viable al conjunto de la clase obrera. En medio se ubica una franja muy numerosa, masiva, de habitantes pobres de la ciudad y el campo descontentos, sufriendo las peores consecuencias de la crisis, pero desorganizados, no sólo políticamente, sino con frecuencia también socialmente. Entre ellos se encuentran muchos de los que apoyaron a la izquierda en las elecciones de julio pasado.

En estas condiciones es que no basta seguir pugnando por una política de frente único de todas las fuerzas del movimiento obrero y de masas. Esto es necesario indudablemente, pero también es necesario crear simultáneamente una fuerza revolucionaria con influencia de masas que obligue, o esté en mejores condiciones de obligar, al frente único al resto de las fuerzas del movimiento.

En esa perspectiva es que el Partido Revolucionario de los Trabajadores se propone en 1983 avanzar en el reagrupamiento de la izquierda revolucionaria en un sólo partido político. Es uno de los retos para la construcción de una salida proletaria a la crisis. □

Esta crisis... Por El Fisgón

Es Que Ya No Alcanza Para La Carne



A pesar de todos

La "ley mordaza" para atrás

Por Ulises Martínez Flores

Después de vivir un sexenio en el cual la actitud del gobierno hacia la libertad de expresión y el derecho a la información se caracterizó por el hostigamiento y la represión, la derogación del reglamento López-Portillo contra la obscenidad —anunciada el 10 de diciembre— hizo pensar a algunos que el nuevo gobierno inauguraría una época en donde los medios de comunicación contarían con un ambiente de libertad y democracia para realizar profesionalmente su labor.

La ilusión duró poco. Al mismo tiempo que De la Madrid decretaba la derogación de la "ley obscena", preparaba la iniciativa de ley para modificar artículos de los códigos Civil y Penal en detrimento de las actividades de información y crítica a través de los medios de comunicación.

Repetiendo las mismas ambigüedades del "reglamento obsceno", las modificaciones al Código Civil propuestas incorporaron a nuestra legislación el concepto de "daño moral" —entendido éste como "la lesión que una persona sufre en sus derechos de la personalidad, tales como sus sentimientos, aficiones, creencias, decoro, honor, reputación, secreto de su vida privada e integridad física, o bien, en la consideración de sí misma"— y decretaban su castigo "mediante un pago compensatorio en dinero".

La tipificación del "daño moral" las iniciativas presidenciales agregaban —a través de la modificación del Artículo 221 del Código Penal— el "delito de deslealtad", concepto que incluía la obligación de los servidores públicos de informar a sus superiores sobre cualquier acto que "pueda afectar gravemente el patrimonio o los intereses de alguna dependencia de gobierno. La misma modificación al Código Penal proponía imponer de dos a siete años de prisión y multa de 30 hasta 300 veces el salario mínimo diario del Distrito Federal a los servidores públicos que proporcionen información o documentación gubernamental y a la persona que difunda dicha información o documentación.

Se configuró así un conjunto de medidas, tendientes a golpear la libertad de expresión y el derecho a la información, que van desde la sanción a quienes pintan muros y paredes "porque contaminan el ambiente", pasan por la prohibición del uso de micrófonos y equipos de sonido en la vía pública "para impedir ruido innecesario", y concluyen con las citadas obstrucciones al trabajo de los informantes.

Dirigidas también hacia un mejor control de la población, estas medidas reditaron el "reglamento obsceno" y se sumaron a la escalada inquisitorial signada por el Código Penal de Jalisco y por la introducción de la Cédula de Identidad como mecanismo de espionaje sobre la población.

En particular la "ley mordaza", como fue

llamada inmediatamente la reglamentación en torno al "delito de deslealtad", representaba un mecanismo legal en contra de los medios informativos democráticos que buscaba acallar las críticas a la ineptitud y la torpeza de los funcionarios gubernamentales, así como encubrir la corrupción que ha caracterizado a la administración pública.

El gobierno se autodenominó así combatiente firme de la inmoralidad en los medios de información y entre los comunicadores a través de conceptos tan vagos como "daño moral" y "delito de deslealtad" —de la defensa en abstracto de la actividad, los sentimientos, el honor y la vida privada, sin considerar que estos asuntos no escapan de un contexto político y social y que, por lo mismo, no pueden estar exentos de la crítica y la confrontación públicas.

Y se postergó una vez más la necesidad de regular el uso de los medios informativos para abrir sus puertas a los movimientos de la clase obrera, los campesinos, las mujeres y los homosexuales, aun cuando estos sectores son los más afectados por la difamación y la caricaturización.

Las modificaciones al Código Civil encontraron el 14 de diciembre la aprobación mayoritaria de los diputados, quienes sólo agregaron a las mismas la especificación de que el estado también puede dañar moralmente a los particulares.

La tradicional subordinación del poder legislativo al ejecutivo no permitía pensar que las iniciativas presidenciales fueran corregidas sustancialmente en su paso por las cámaras. Pero no dejó de sorprender e indignar que la llamada oposición —con la excepción del Partido Acción Nacional (PAN) y de algunos diputados pedemistas— votara también a favor de dichas iniciativas.

Sin duda alguna, al interior de la izquierda tiene especial relevancia el voto del Partido Socialista Unificado de México (PSUM), porque reafirma la conducta parlamentaria que inició en años pasados la Coalición de Izquierda y que hoy continúa este partido —conducta que incluso ha llegado al apoyo de leyes antiobreras y antipopulares, como fue el caso de la aprobación de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo en 1980.

El diputado pesumista Ángel Sánchez Pérez, al referirse en la cámara a la "ley moral", señaló que por primera vez "se ha roto la inercia del derecho mexicano en material tutelar para los derechos subjetivos de la personalidad" y felicitó a los miembros de la Comisión de Justicia del parlamento por su trabajo en el estudio de la iniciativa.

Al igual que el "reglamento obsceno", la "ley moral" y el "delito de deslealtad" produjeron una ola de protestas y descontento

en la opinión pública, que presionó para que la aprobación de los diputados fuera anulada por los senadores.

Ante esto, diversos senadores hicieron patente su decisión de defender la libertad de expresión y el derecho a la información. Y el PSUM, saliéndole al paso a las críticas, citó a conferencia de prensa el 17 de diciembre para tratar de esconder lo evidente que con su voto había avalado la política restrictiva del gobierno en contra de los medios de información. En dicha conferencia, los diputados del PSUM declararon que las reformas al Código Civil no afectaban las libertades de expresión y de prensa, y que las críticas recibidas se debían al desconocimiento de las iniciativas aprobadas.

Para desgracia de los priistas y los partidos que apoyaron las iniciativas presidenciales, la ola de críticas a la "ley mordaza" siguió en ascenso y se consiguió que el Senado incorporara el 27 de diciembre modificaciones sustanciales a lo aprobado en la cámara baja.

Estas modificaciones fueron, en el caso de las reformas propuestas para el Código Civil, la adición de un párrafo que especifica que "no estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información en los términos y con las limitaciones de los artículos 6 y 7 de la Constitución General de la República", y de un nuevo artículo para que queden "plenamente aclaradas dudas de orden teórico que puede dar lugar a que se piense impropriadamente que la reforma al Artículo 1916 podría denegar las libertades de opinión, crítica, expresión e información."

Por su parte, la Cámara de Diputados suprimió de la propuesta de modificación al Código Penal toda referencia al "delito de deslealtad" porque "las múltiples acepciones de la palabra lealtad pudieran dar lugar a confusión e inseguridad". Sin embargo, incorporó el "delito de ejercicio indebido del servicio público", prácticamente en los mismos términos que el de deslealtad, pero dirigido sólo a castigar a los servidores públicos que proporcionen información o documentación gubernamental y no a los informadores que la difunden.

De esta forma, la "ley mordaza" —al igual que el "reglamento obsceno"— fue echada para atrás, en lo sustancial, por aquellos a los que trataba de afectar: los profesionales del periodismo y la comunicación, quienes con su protesta y su organización defendieron en la práctica las libertades de expresión y de prensa y el derecho de información, a pesar de los votos del Partido Revolucionario Institucional, el Partido Popular Socialista, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Demócrata Mexicano y el PSUM en la cámara baja.

Los socialistas en el parlamento

Por Edgard Sánchez R.

La aprobación de la "ley de la mordaza" en la Cámara de Diputados trae a colación un problema cuyo enfoque estuvo frecuentemente fuera del debate que provocó. Este es el de la actitud de los socialistas en el parlamento.

El apoyo del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) a dicha ley —con la gravedad que implica el que ofreciera una cobertura de izquierda a una limitación de la libertad de expresión— permite establecer una comparación entre su concepción y la que propone el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) para el trabajo parlamentario y que, por la decisión fraudulenta del gobierno, quedó fuera de la Cámara de Diputados.

La argumentación del PSUM y de otras corrientes no priistas para apoyar la "ley de la mordaza" es que su preocupación era ofrecer elementos de defensa a los ciudadanos víctimas de las campañas de calumnias de la prensa amarillista. Apoyaban por ello la introducción de penas y castigos a quienes hicieran esto uo corrupto y mercenario de la prensa. Ciertamente que estas sanciones podían volverse contra los críticos del sistema, pero se quiso ofrecer protección al ciudadano inermemente frente a la agresión mercenaria.

La trampa de la argumentación está en proponer castigos. En un parlamento burgués, los socialistas revolucionarios no deben entrar al terreno de las reformas al Código Penal. Por muy buenas intenciones que pueda haber de parte de un legislador socialista, es incorrecto ofrecer mayores armas al estado capitalista para que reprima.

Por el contrario, debe ser nuestra preocupación reducir ese poder del estado, no legalizarlo aún más; aumentar las garantías de los ciudadanos frente al estado y no las atribuciones de éste frente a los mismos. Los derechos que se quería garantizar deberían, en todo caso, estar establecidos constitucionalmente.

Para algunos, sin embargo, es cuestión de ser "responsables" y presentar siempre propuestas, hasta para el Código Penal. Los que no las hacemos somos, desde su punto de vista, simplemente contestatarios, incapaces de ofrecer alternativas concretas.

La orientación seguida en este caso es similar a la que ya debatimos en el pasado con el Partido Comunista Mexicano, antecesor del PSUM en relación con el aborto. Cuando se discutió la cuestión en el contexto de la pasada legislatura también nos opusimos a que se incluyera cualquier cosa en relación con el aborto en el Código Penal. Por el contrario, había que sacar todo lo relativo al aborto de esa legislación, despenalizarlo totalmente y no entrar a la discusión de cuándo era punible y cuándo no. Lo importante era garantizar el derecho a la maternidad voluntaria, no la pena a sus supuestos infractores.

Esta orientación revolucionaria es a la que el gobierno del PRI impidió llegar a la Cámara de Diputados con el fraude electoral realizado contra el PRT y sus candidatos.



¿Quién decide qué es obsceno?

y "buenas costumbres" provocarían adhesión inmediata, y la expresión "degeneración sexual" causaría un estremecimiento perdurable. La realidad los ha defraudado. En el México de hoy, ya las medidas inquisitoriales al amparo de la moral tradicional no encuentran la mínima credibilidad". Tal desplegado, firmado por el Grupo Lambda de Liberación Homosexual y otras organizaciones gays, fue una de las múltiples expresiones de rechazo al decreto.

De inmediato, la amplia oposición al decreto pasó de las palabras a los hechos. Pronto se convocó a un primer mitin público de repudio a la ley y se exigió su derogación. Pero ni siquiera fue necesario que tal acto se realizara: el gobierno tuvo que dar marcha atrás y días antes del mitin derogó el decreto mentado.

Sin duda fue un triunfo del movimiento democrático. El

nuevo gobierno de Miguel de la Madrid sabía que si sus famosas tesis de la "renovación moral" intentaban afectar en lo más mínimo los espacios políticos y las garantías constitucionales que el pueblo de México ha logrado a lo largo de varios años de lucha social, ello provocaría una tajante respuesta de oposición por parte de importantes sectores de la población.

Ahora bien, como es conocido, tal decreto fue sólo el inicio de una serie de medidas legislativas tendientes a fortalecer el control político del gobierno, sacudido por una fuerte e inculcable crisis económica. El análisis de tales iniciativas merece espacio aparte, pero estamos seguros de que cualquier ley que pretenda arrancar espacios ya conquistados o que en nombre de la moral dé paso a la represión política tendrá como destino, muy a pesar de la aprobación de las cámaras legislativas y de algunos partidos, el cesto de la basura.

Una obscenidad menos: el gobierno reculó

Por Manuel Álvarez

A partir de la publicación en el *Diario Oficial* el día 26 de noviembre, a sólo cuatro días del cambio de sexenio, el "decreto obsceno" logró escandalizar hasta a las mejores conciencias.

El decreto presidencial llamado "Reglamento sobre publicaciones y objetos obscenos", regalo de fin de sexenio de López Portillo, pretendía ser, según se explicaba en los considerandos, un mecanismo jurídico mediante el cual se limitaría, prohibiría y castigaría una serie de excesos que, a través ya sea de publicaciones u objetos, pretendieran alterar la "moral" (?) y las "buenas costumbres" (??). Así encontramos que, se decía, "...se ha observado la necesidad de combatir otro tipo de publicaciones lascivas como las películas obscenas...que junto con la influencia nociva de las videocassettes y películas mencionadas también han llegado procedentes de otros países objetos obscenos de diversos tipos que hasta ahora no habían podido ser combatidos administrativamente...que por el grave daño que causa a la so-

riedad la distribución de objetos obscenos o publicaciones ilícitas, debe facultarse a la comisión para que ordene el retiro de tales publicaciones u objetos". El interés central era, pues, facultar a una comisión formada por quién sabe quién y con plenos poderes inquisitoriales para castigar con multas o cárcel a quien o quienes, por medio de manifestaciones escritas o visuales, invocaran a la sexualidad, el erotismo y en general los llamados placeres de la carne (humana, claro está).

Así, también se consideraba contrario al derecho y a la moral pública "Adoptar temas que pudieran dañar la actitud favorable al trabajo y al entusiasmo por el estudio [sic]...contener temas contrarios a la solidaridad internacional...contener cualquier perversion sexual...emplear expresiones contrarias a la corrección del idioma [chale]...emplear expresiones que directamente o mediante anfibología, sean groseras [chin], obscenas u ofensivas [sic]". Y lo más grotesco: "Las publicaciones científicas o de arte pictórico, escultórico o fotográfico...que son las únicas que podrán contener

desnudos— no los harán en la contraportada, lomo, ni en la portada; deberán especificar en ésta, con letras visibles, que son 'sólo para adultos' (!) y únicamente podrán exhibirse en bolsas de plástico cerradas (!!!)".

Con esta serie de incoherencias restrictivas y maquiaváticas por sabe qué mente retardataria, el decreto de marras pretendía de paso arrebatar una serie de espacios políticos que diversos movimientos democráticos han conseguido a través de largos años de luchas. Como concreto es que, con tal engendro jurídico, se sentaba un precedente legislativo contra el Movimiento de Liberación Homosexual, ya que la aplicación subjetiva de tal ley limitaría al movimiento político que a lo largo de varios años se ha venido conformando en México a favor de los derechos civiles y sociales de lesbianas y homosexuales.

Las repercusiones de tal decreto afectarían también a diversos movimientos artísticos y culturales que se han expresado de distintas maneras en nuestro país. Reproducciones de pasajes bíblicos, expresio-

nes pictóricas de artistas mexicanos y extranjeros, escritos de intelectuales, aportaciones literarias, revistas médicas, y publicaciones de organizaciones feministas y homosexuales estarían violando alguno de los artículos del decreto.

Pero los autores del "decreto obsceno" y el gobierno no contaban con que la sociedad civil del México 1982-1983 no permitiría que mediante un reglamento volviéramos a situaciones propias del medioevo o análogas a las implantadas por el fascismo-nazismo en los años treinta y cuarenta. Y no podía ser de otra manera. Como correctamente lo señala un desplegado aparecido en la edición del 10 de diciembre del diario *unomásuno*, "El rechazo unánime al nuevo decreto de publicaciones y objetos obscenos hace evidente no sólo su ridiculez y su pobre carácter fascistoide, sino la madurez creciente de la sociedad civil en lo referente a la libertad de expresión y derechos elementales de las minorías. Quienes pergeñaron el decreto en cuestión imaginaron una sociedad crápula e inmóvil, donde las abstracciones 'moral'

Las elecciones de 1983 y el PRT

Por Pedro Peñaloza

En 1983 habrá elecciones en 15 entidades federativas: Campeche, Chihuahua, Durango, Michoacán, Zacatecas, Baja California Norte, Baja California Sur, Aguascalientes, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Sinaloa, Puebla, Guerrero y Tamaulipas. Se elegirán autoridades municipales, diputados locales y, en Baja California Norte, gobernador.

Como nuestros lectores recordarán, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) no pudo participar en todas las elecciones locales del año pasado a raíz de la maniobra gubernamental que consistió en retrasar la entrega de la constancia de registro definitivo de nuestro partido. Sin embargo, ahora ese trámite está superado y no habrá quien pueda impedir que se presente en las boletas electorales el rectángulo rojo con la hoz y el martillo, símbolo del PRT.

No creemos, después de las recientes elecciones municipales —particularmente las de Chiapas, Tlaxcala, Veracruz, San Luis Potosí y Jalisco—, que haya alguien que cuestione la necesidad de participar electoralmente en los municipios y, por supuesto, en las elecciones estatales.

Las pasadas elecciones municipales han demostrado contundentemente la explosividad de los habitantes de los municipios y el creciente desgaste de las estructuras de control municipal; pero también han sacado a flote la urgente necesidad de la participación de los socialistas en este tipo de elecciones para evitar que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los partidos derechistas —Partido Acción Nacional (PAN) y Demócrata Mexicano (PDM)— sigan haciendo de las suyas en los municipios. No es admisible que la izquierda revolucionaria le deje las manos libres al PRI y pierda por default en la célula del sistema político mexicano. Los revolucionarios tienen que aprovechar todas las oportunidades que se presenten para implantarse en el movimiento de masas, máxime cuando los municipios han sido una riquísima veta del partido oficial para articular y sistematizar el carterismo político priista, y la plataforma básica de negociación entre los grupos de caciques y terratenientes locales, que han encontrado ahí el lugar adecuado para sus fechorías sin hallar generalmente una oposición organizada.

La Reforma Política es inexistente en los municipios. La representación proporcional en la mayoría de los casos no existe y, si la hay, es otorgada caprichosamente por los gobiernos es-

tatales. En el plano económico, el municipio carece de recursos importantes y está sujeto a los favores del gobernador en turno. El pillaje que practican las autoridades municipales no tiene límite. La participación de justicia es un insulto. En fin, el PRI ha convertido al municipio en una empresa y ve a todos los habitantes pobres como sus empleados.

Sin embargo, las cupulas del gobierno y del PRI se han dado cuenta del deterioro de su dominio en los municipios, por lo cual han propuesto algunas modificaciones al artículo 115 constitucional que hablan de hacer autosuficiente al municipio y también de garantizar la proporcionalidad electoral en ellos.

Dichas modificaciones, sin embargo, no tendrán efecto alguno en el caso de que los municipios no cuenten con sus propias empresas y carezcan de ingresos propios por la vía de los impuestos. Por lo demás, en lo referente a la proporcionalidad, se trata de una propuesta impracticable mientras no se modifiquen las constituciones estatales que plantean serias restricciones a la participación de los partidos de oposición. En fin, la transformación de los municipios requiere mucho más que una barnizada.

A la luz de estos elementos se desprende la importancia que tendrá la participación de la izquierda socialista en estas elecciones. Las tremendas insurrecciones —algunas de ellas armadas— contra presidentes municipales y contra candidatos priistas impuestos corroboran su importancia. Es necesario terminar con el ciclo: ruptura del PRI, ingreso al PAN o al PDM. Es preciso impulsar la autorganización de los trabajadores y campesinos, por barrios, colonias, ejidos y rancherías, independientemente del PRI y demás partidos patronales. Hay que impulsar que ellos elijan a sus candidatos, que luchan por lograr sus objetivos con la movilización y las asambleas generales. Este es el mejor antídoto contra las prácticas patronales, pero también el inicio de una concepción distinta del municipio.

El PRT considera, por lo mismo, que no sólo la izquierda revolucionaria debe participar en las elecciones municipales. Deben hacerlo también las organizaciones sociales de masas, para convertir la participación electoral en un foro que contribuya a unir a los trabajadores contra sus explotadores, quienes en las elecciones tratan de esconder su carácter con frases o lemas. El registro del PRT servirá para desenmascararlos.

Construir el FNCR en Durango, necesario

Por Sergio Ramírez Cárdenas

DURANGO, Dgo.—En un artículo anterior, aparecido en el número 243 de BS, iniciamos el debate con los compañeros del Comité de Defensa Popular (CDP) acerca de la necesidad para las fuerzas democráticas de Durango de impulsar la construcción del Frente Estatal contra la Represión. Según declamamos en esa ocasión, esta necesidad corresponde al carácter global de la política represiva del gobierno mexicano y, obviamente, a la situación represiva que vive el Estado de Durango. Sobre la argumentación de los compañeros del CDP expuesta en el artículo mencionado, nos queda por considerar el carácter del Frente Nacional contra la Represión (FNCR) y las posibilidades reales de impulsar su construcción en Durango.

El papel del FNCR

El FNCR surgió en diciembre de 1979 con el objetivo de aglutinar al mayor número de organizaciones en la lucha por las libertades democráticas, por la solidaridad y contra la represión en nuestro país. Su surgimiento fue antecedido por varios años de experiencia unitaria, plena de movilizaciones, plantones, huelgas de hambre, etc., que enriquecieron y permitieron que el FNCR surgiera con gran vitalidad y solidez. En poco tiempo este frente se convirtió en la experiencia unitaria más importante después de la extinción del Frente Nacional de Acción Popular (FNAP) tras el duro golpe sufrido por la Tendencia Democrática del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) a manos del gobierno.

El desarrollo ulterior del FNCR ha sido un ejemplo de lucha independiente con el respaldo de importantes organizaciones de masas de todos los sectores de la población trabajadora. Representaciones obreras, campesinas, estudiantiles y populares han participado activamente en la consolidación del frente, además de que éste cuenta con la presencia de la mayor parte de las corrientes políticas de la clase trabajadora del país. La composición del FNCR lo hace un organismo de frente único de los trabajadores en la lucha por las libertades democráticas y contra la represión.

En cuanto a su política, la lucha del FNCR está marcada por la clara independencia de este organismo frente al gobierno. Esto tenía que ser así ya que, como dijimos anteriormente, la lucha contra la represión se enfrenta directamente a una de las bases fundamentales de dominio del gobierno sobre el movimiento de masas. Esta lucha, aunque se ubica en el terreno de las demandas "puramente" democráticas, tiene un carácter sumamente progresivo en la medida en que, cada vez más, pone en cuestión la existencia misma de un sistema de explotación —represión como lo es el capitalismo mexicano.

Pero el FNCR no es solamente un organismo de denuncia, ni la lucha contra la represión es solamente "contestataria". La lucha que ha venido desarrollando este frente es sumamente concreta y con evidentes logros prácticos. A partir de que el Comité por Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos —columna vertebral del FNCR— inició su lucha, se ha logrado la liberación de la absoluta mayoría de los presos políticos que existían en el país, así como la presentación de 32 compañeros detenidos-desaparecidos. También se ha logrado disminuir de una manera evidente la práctica de la detención-desaparición en el país. Por otra parte, el FNCR se ha caracterizado también por ser un

Por Eduardo Castro

El martes 3 de diciembre tuvo lugar en el Palacio Nacional un encuentro entre el presidente de la república, Miguel de la Madrid, y representantes de los partidos políticos registrados, a iniciativa del propio presidente.

De la Madrid estuvo acompañado por su Secretario de Gobernación, licenciado Manuel Bartlett, y hubieron dos representantes por cada partido con registro, excepto el Partido Revolucionario Institucional (PRI), del cual sólo asistió su presidente, Adolfo Lugo Verduzco. Por el Partido Acción Nacional (PAN) estuvieron Abel Vicencio Tovar y Jesús González Schmall; por el Partido Popular Socialista (PPS), Jorge Cruickshank García y Jesús Luján; por el Partido Demócrata Mexicano (PDM), Gumerindo Magaña; por el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Pablo Gómez y Rolando Cordera; por el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Rafael Aguilar Talamantes y Juan Manuel Elizondo; y por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Edgard Sánchez y Ricardo Pascoe.

La reunión se inició con una intervención de Miguel de la Madrid. La idea central de su discurso era que, en una época de crisis y con la necesidad de medidas económicas correctivas, siempre hay el peligro de que se produzca un endurecimiento de la vida política del país. Según de la Madrid, sin detrimento de una aplicación estricta y enérgica de tales medidas económicas, su gobierno quería evitar tal dinámica. Con ese objetivo convocaba a los partidos políticos nacionales para que escucharan sus propuestas en relación a diversos aspectos de la vida política, especialmente frente a las iniciativas que planteó el día de su toma de posesión como presidente de la república, es decir, la celebración de foros organizados por la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría de Justicia. También pidió opiniones sobre la celebración de reuniones como ésta.

Después de la intervención de de la Madrid, Bartlett dio la palabra a uno de los representantes de cada partido. Vicencio Tovar reclamó respeto a los procesos electorales como los que se celebraban en ese mo-

mento en San Luis Potosí y Guanajuato. Cruickshank recordó que de la Madrid había sido el candidato de su propio partido y señaló la necesidad de profundizar la defensa de la independencia nacional. Pablo Gómez propuso que a las comparecencias asistieran personas representativas, especialmente de partidos y otras instituciones como las universidades, y no cualquier abogado sin representación. Gumerindo Magaña apoyó la política de de la Madrid y planteó la necesidad de que se cumpla con lo ofrecido, porque el pueblo desconfía de tantas promesas. Aguilar Talamantes reclamó que se fortaleciera el sector social de la economía. Lugo Verduzco afirmó que los planteamientos del gobierno de de la Madrid son los mismos que su partido hizo durante la campaña.

En su turno, Edgard Sánchez afirmó que para el PRT se constataba el hecho de que la política económica del régimen afectaba básicamente a los trabajadores de la ciudad y el campo, y que ahí encontramos nuestra principal oposición al actual régimen. Por ello —dijo— no pretendemos encontrar coincidencias en este campo; por el contrario, planteamos que si realmente se quiere evitar una dinámica de endurecimiento de la vida política del país es necesario garantizar el ejercicio de libertades democráticas para los trabajadores. Estos es ahora más necesario que nunca, pues las tensiones sociales que se están creando empujarán a los trabajadores a hacer uso de las libertades democráticas más frecuentemente.

Se reclamó respeto al derecho de huelga y sindicalización, que han sido limitados especialmente durante los últimos años, y al derecho de manifestación y reunión, que tan sólo una semana antes se había tratado de restringir en la Ciudad de México. Sobre el derecho de información, se recordó la exigencia del PRT de que se informe satisfactoriamente sobre los desaparecidos políticos y éstos sean presentados vivos.

El PRT, a través de Edgard Sánchez, colocó en segundo lugar lo referente a la acción electoral, aunque sin subestimarla, sobre todo por la experiencia que el propio PRT tuvo en su primera participación en ese campo. En este sentido, Sán-

chez manifestó que nos oponemos a que se nos dé un trato similar en las futuras participaciones electorales a niveles municipal y estatal.

Todos los presentes coincidieron en la importancia de la reunión. De hecho, es la primera ocasión en que un presidente de la república convoca a todos los partidos políticos con registro a una reunión con esas características. El presidente planteó que se trataba de una instancia especial, distinta de la que se puede tener por la vía de la Cámara de Diputados o la Comisión Federal Electoral.

Después de escuchar a cada partido, de la Madrid hizo una última intervención. Señaló, respondiendo a propuestas en ese sentido, su compromiso de realizar reuniones periódicas como ésta, a las que podrían asistir también secretarios de estado y directores de empresas descentralizadas.

La realización de esta reunión, sólo siete días después de que de la Madrid tomara posesión, es significativa. Muestra que este gobierno es muy consciente de las grandes tensiones sociales que puede generar la aplicación de un plan de austeridad extremadamente brutal, como el que se ha visto en los primeros días del nuevo gobierno. De la Madrid, desea crear una válvula de escape para esa presión social por la vía política. Por eso no están descartadas algunas medidas que tiendan a flexibilizar la vida política, por ejemplo, en relación con el gobierno del Distrito Federal, la integración de la Cámara de Senadores o el uso de mecanismos de "consulta popular" tipo referendums que, sin embargo, no afecten en lo esencial la aplicación de la austeridad más brutal contra los trabajadores.

Por estas razones el PRT plantea la necesidad de que la izquierda y el movimiento de masas adopten una orientación global, no unilateral, frente a la política oficial. La izquierda debe aprovechar cualquier oportunidad para profundizar las libertades democráticas, extender su ejercicio y lograr nuevas conquistas. Al mismo tiempo, debe evitar caer en la trampa de cambiar el respeto de ciertas libertades formales —especialmente de tipo electoral— por la aceptación o la colaboración en la aplicación del plan de austeridad.

organismo con amplia capacidad política para la solidaridad. Todo lo anterior nos presenta al FNCR como un organismo necesario y útil para el movimiento de masas.

Los "vicios" del FNCR o el sectarismo del CDP

Ante esto, ¿cuáles son los argumentos de los compañeros del CDP para cuestionar la participación en el FNCR? Ellos plantean que el FNCR es un organismo "viciado" que está dirigido por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Esto lo desprenden de que la compañera Rosario Ibarra de Piedra fungió como candidata a la presidencia de la república por parte de

nuestro partido y de la participación que el PRT ha demostrado en la lucha contra la represión.

Es evidente que esta argumentación no demuestra más que una posición sectaria del CDP ante el FNCR y el PRT, pero existen cuestiones de fondo que le dan importancia a esta discusión.

En primer lugar, diremos que el hecho de que la compañera Rosario Ibarra haya sido candidata a la presidencia por parte del PRT no está en contradicción con el hecho de que es una distinguida representante de la lucha contra la represión a nivel nacional e internacional. Así habría sido también en el caso de que Rosario Ibarra hubiera pertenecido a nuestro partido. La libre participación política es un derecho democrático que debe reivindicarse y defenderse en todas las organizaciones de masas, y no utilizarse para desacreditar públicamente a un organismo de frente único.

En segundo lugar, existe un enfoque incorrecto por parte de los compañeros del CDP sobre lo que es la dirección de un frente. El FNCR —lo mismo que hoy el Frente Nacional en Defensa del Salario, contra la Austeridad y la Carestía (FNDESCA)— tiene un programa de demandas formado por los puntos de acuerdo común entre todas las organizaciones que lo componen; de ahí se deriva, precisamente, la posibilidad de la participación unitaria de diferentes corrientes políticas en un solo organismo al tiempo que cada organización mantiene su autonomía para seguir reivindicando el conjunto de su programa.



La OLP es el representante legítimo del pueblo palestino

Por Aníbal Yáñez

El estado de Israel fue creado en 1948 en lo que era Palestina, con lo que culminó una etapa de la guerra que los colonos sionistas libraron y siguen librando contra el pueblo árabe palestino. Las fuerzas sionistas destruyeron cientos de aldeas palestinas, expulsando a miles de palestinos de sus tierras. Pero miles permanecieron dentro de las fronteras del recién fundado estado sionista. Hoy, ese número ha crecido hasta llegar a cerca de medio millón.

Hassan Jabarin es uno de esos palestinos que viven bajo la dominación sionista, en Um el-Fahem, el principal poblado palestino en Israel. Con 30 años de edad, es dirigente de *Abna el-Balad* (los Hijos del Pueblo), una organización de los palestinos dentro de las fronteras de Israel. Hablaba con el compañero Hassan sobre la situación de los palestinos en el estado sionista y en general sobre la situación en la región después de la invasión israelí a Líbano.

Confiscación de tierras palestinas

¿Que pasó con las tierras de los palestinos que no fueron expulsados del recién formado Israel?, le preguntamos.

"Después del establecimiento del estado israelí", relata Hassan, "las autoridades israelíes siguieron confiscando las tierras de los 150 mil palestinos que se habían quedado en su patria.

"En su mayoría los palestinos en aquel entonces eran campesinos que labraban la tierra. Pero los autoridades israelíes promulgaron una serie de leyes que permitieron la confiscación de estas tierras", explica. "Todas las tierras comunales fueron confiscadas inmediatamente. También impusieron una ley de *asentistas*, que afectó a los palestinos refugiados, a los exiliados y a todos los que por alguna razón no se encontraban en sus aldeas o pueblos en 1948. Todas esas tierras fueron confiscadas.

Además, los sionistas usan pretextos militares para confiscar las tierras de los palestinos. Por ejemplo, nos dijo Hassan que las autoridades decretan que cualquier área que pertenece a los palestinos es una "área cerrada", una área militar para maniobras, etcétera. Los militares sionistas permanecen en esas tierras durante varios años, y luego les aplican una ley que estipula que las tierras se confiscan si no son cultivadas durante tres años.

"Así, nos encontramos sin tierra", dice Hassan. "En Um el-Fahem, mi aldea, por ejemplo, con su población actual de unos 22 mil habitantes, hay sólo 16 personas que tienen tierras de antes de 1948. Todas las demás fueron confiscadas. Esta tierra que se tiene no alcanza ni para construir viviendas. Ni hablar de granjas, programas de desarrollo, la construcción de nuevas escuelas, una base industrial o cualquier tipo de industria".

Esta confiscación de la tierra ha creado una enorme crisis económica y social en la sociedad palestina. Los sionistas —pese a la propia historia del pueblo judío— relegaron a los palestinos a lo que en verdad son *ghettos* más que aldeas.

Durante 17 años, de 1948 a 1965, los desalojos y la opresión se mantuvieron con un gobierno abiertamente militar sobre los poblados palestinos. Había un gobernador militar israelí en cada aldea, quien era la autoridad máxima. A la gente se le constreñía su derecho de movimiento entre una aldea y otra, y para ir de su aldea a trabajar a otra zona necesitaba permiso militar.

En el curso de los años, como resultado sobre todo de la confiscación de sus tierras, la mayoría de los campesinos palestinos se convirtieron en trabajadores. Trabajadores no en su propia tierra o en sus pueblos, sino en la industria de la construcción en Tel Aviv, Jaita, u otros poblados; en restaurantes; en el trabajo doméstico; en granjas formadas con las tierras que eran de ellos pero que hoy son de los colonos sionistas. Este proceso de

proletarianización de la población palestina continúa.

Programas de educación colonialistas

¿Qué tipo de vida llevan los palestinos dentro de las fronteras de Israel? ¿Qué condiciones de trabajo, vivienda, salud, educación y derechos políticos tienen en el "democrático" estado sionista?

"Encontramos una discriminación constante en todas las esferas de la vida", nos dice Hassan. "En la educación, por ejemplo, no hay suficientes aulas para nuestros estudiantes, para nuestros hijos. Nuestra población aumentó de 150 mil personas en 1948 a 600 mil personas actualmente —tenemos la tasa de fertilidad más elevada del mundo".

Los programas de educación, que son decididos por el ministerio de educación israelí, "ignoran totalmente la historia, la literatura, el arte, los poemas árabe-palestinos. Y también ignoran la historia moderna árabe y el renacimiento moderno de la cultura árabe, la revolución árabe".

"De manera que nosotros", dice orgulloso el compañero Hassan, "tenemos que impulsar un programa educativo *extraoficial* fuera de las escuelas, para enseñarle a nuestro pueblo, para mantener nuestra cultura, nuestra historia".

Destrucción de viviendas con bulldozers

"En cuanto a la vivienda", continúa, "las autoridades israelíes no dan permisos para construir hogares fuera de los límites de las zonas para construcción establecidas antes de 1948 bajo el dominio británico; no amplían estas áreas y en algunos casos las han reducido.

"De manera que nuestro pueblo re-

cios que necesitamos, no hay médicos, etcétera. Las autoridades israelíes han limitado el número de estudiantes palestinos que pueden cursar la carrera de medicina; sólo permiten que se reciban tres doctores palestinos al año. Así, de los pocos doctores que hay en Um el-Fahem, la mayor parte hizo sus estudios en los países socialistas, la Unión Soviética y Europa Oriental. Nada más uno hizo su carrera en Israel".

Una lucha constante

Sin embargo, los palestinos dentro de las fronteras del estado de Israel están decididos a que habrá un futuro en el que la tierra será nuevamente de ellos.

"Nosotros", dice Hassan, "a lo largo de nuestra historia hemos sufrido la discriminación sionista. Y la hemos combatido, constantemente... Hemos conquistado el derecho de permanecer en nuestra tierra".

Recuerda Hassan: "En 1956 los sionistas realizaron una masacre, la masacre de Kfar Kasem en el Área del Triángulo, cerca de Tel Aviv. Esta masacre se dio en vísperas de la agresión israelí contra Egipto. En esos momentos de guerra, cuando dos países imperialistas [Gran Bretaña y Francia] e Israel atacaron a Egipto, todos los ojos de la opinión pública mundial estuvieron puestos en el conflicto. Y en esos momentos realizaron los sionistas la masacre de Kfar Kasem. Acabaron y mataron a 59 personas y hubieron muchos heridos, para sembrar el terror entre nosotros y obligarnos a dejar nuestras aldeas y huir al Margen Occidental, que era parte de Jordania".

"Pero aprendimos de nuestra experiencia histórica", continúa, "de la experiencia de 1948. No podíamos irnos, no nos íramos. De manera que

a todos los grupos y elementos democráticos, progresistas, antisionistas y socialistas en la sociedad judía israelí. Y tenemos ya una cooperación con estas fuerzas contra los sionistas".

Los objetivos del imperialismo en la región del Medio Oriente

En los últimos meses, el Medio Oriente ha sido el escenario de la más intensa actividad diplomática desde la conclusión de los acuerdos de Campo David entre Israel y Egipto en 1978-79. Media docena de enviados y embajadores especiales de Estados Unidos han estado yendo y viniendo entre las capitales árabes e Israel, y una serie de delegaciones árabes ha viajado a Washington tras la conferencia cumbre árabe celebrada en Fez, Marruecos, del 6 al 9 de septiembre. Yasser Arafat, el dirigente de la OLP, se ha reunido con el rey Hussein de Jordania, etc.

Al parecer, lo que está en el centro de toda esta actividad diplomática es el plan propuesto por el presidente norteamericano Ronald Reagan el 1 de septiembre, según el cual supuestamente se pondría fin a la ocupación israelí del Margen Occidental y la Franja de Gaza, y esta zona pasaría a formar parte de Jordania bajo algún tipo de federación. A cambio de ceder los territorios ocupados, según el plan Reagan, Israel lograría el reconocimiento de los estados árabes y un tratado de paz.

Le preguntamos a Hassan Jabarin qué es lo que realmente está en juego para el imperialismo norteamericano.

"Primero", dijo Hassan, "es necesario hablar sobre los acontecimientos anteriores a la agresión israelí contra Líbano. Antes de esa agresión, la ocupación israelí trató de destruir la *infraestructura*, como dicen, de la OLP en el Margen Occidental y la Franja de Gaza. Confiscaron el agua. Confiscaron más del 40 por ciento de la tierra en el Margen Occidental y la Franja de Gaza. Atacaron a los alcaldes nacionalistas de las ciudades del Margen Occidental, quienes habían sido elegidos *bajo la ocupación israelí*".

"Pero en lo sustancial los sionistas fracasaron en esta agresión. Un factor clave fue que los palestinos dentro de Israel se sumaron a la lucha de los palestinos en el Margen Occidental y la Franja de Gaza contra todas estas agresiones. Así, el 30 de marzo de 1982 declararon una huelga general en solidaridad con ellos."

Por otra parte, señaló Hassan:

"El objetivo central del imperialismo es mantener el control de toda nuestra región, de todo el mundo árabe, el Medio Oriente. Esto está muy claro. Los imperialistas quieren controlar el petróleo, sus mercados, mantener en sus garras a los países de la región. Y utilizan *todos los medios* para esto. Su relación con Israel es tan estratégica y profunda porque saben que Israel es el régimen más estable en la región y porque saben que Israel está dispuesto a ser una base para ellos. Y también porque piensan que el ejército israelí está listo para atacar a cualquier movimiento nacionalista o socialista en el área".

"Los imperialistas", apunta, "tienen muy buenas relaciones, tienen sus agentes, con los regímenes árabes, como el saudita. Pero saben que estos regímenes no son estables. Tienen la mejor relación con el Cha en Irán. Y un buen día todo se les vino abajo. Lo mismo les puede suceder con Egipto o en cualquier otro país árabe".

"Al luchar contra los sionistas luchamos contra el imperialismo"

"Por esto mantienen una relación tan fuerte con Israel. Por esto, al luchar contra los sionistas, en realidad nos enfrentamos y luchamos contra el imperialismo norteamericano en su disfraz sionista."

"Todo palestino sabe", insiste Hassan, "que el enemigo principal, el principal agresor contra ellos y sus derechos, es Reagan, su administración, el imperialismo norteamericano. Esto lo sabemos los palestinos, lo sentimos en carne propia —sin el apoyo nortea-

americano los israelíes no podrían hacer nada. Fueron armas norteamericanas en manos de Israel las que mataron a nuestro pueblo en Líbano".

"La llamada iniciativa de paz de Reagan", apunta Hassan, "es *peor* aun que iniciativas anteriores. Se refiere a los 'habitantes locales', la 'población local'. ¡Ni siquiera habla del pueblo palestino! No habla de la OLP como el representante legítimo del pueblo palestino".

"La OLP es el movimiento de todo un pueblo"

"Si verdaderamente busca la paz y la democracia, *tiene que aceptar* la decisión democrática del pueblo palestino. La revolución palestina es una experiencia democrática inédita en el Medio Oriente. El pueblo palestino, de la manera más ampliamente democrática, eligió a su dirección. La OLP no es una junta militar, no es producto de un golpe. Es el movimiento de todo un pueblo", subraya Hassan.

Los imperialistas no aceptan esto. Hablan de una federación con Jordania. Nosotros no estamos en contra de la unidad árabe, en base a la democracia, en base al socialismo. Pero no permitiremos que ni Reagan ni nadie decida para nosotros con quién nos vamos a unificar y cómo. Es *nuestro destino, nuestra causa*. Tiene que ser una decisión libre y democrática. En primer lugar tenemos que conquistar *nuestra independencia*. Después podremos establecer relaciones federadas y confederadas con Jordania, con Iraq, Siria, Líbano y todo el mundo árabe, pero con base en la democracia y el socialismo. No en base a la visión del imperialismo."

Desinformación imperialista y firmeza de la OLP

Desde que se celebró la conferencia cumbre de Fez, diversos medios propagandísticos del imperialismo han pregonado que las iniciativas diplomáticas de la dirección de la OLP significan un acercamiento con Washington. Que Arafat ha abandonado la perspectiva de un estado palestino independiente y que trata de llegar a un acuerdo con los imperialistas sacrificando la causa por la que tanto se ha luchado. ¿Qué opina Hassan de esta versión?

"Nosotros tenemos que luchar, en este período, por impedir que las autoridades israelíes y los imperialistas norteamericanos recojan los frutos de la agresión a Líbano", explica Hassan. "De manera que nuestra dirección, la dirección palestina, la OLP, tiene que utilizar *todos los medios de lucha*, incluidos los medios políticos y diplomáticos. Nosotros entendemos por qué Yasser Arafat visita Jordania, por qué participa en la cumbre de Fez. Porque si no estuviera allí tal vez los regímenes árabes obtendrían la legitimidad del pueblo palestino, arrebatándosela a la OLP. Por esto los palestinos tienen que estar presentes en todos los foros.

"Creemos que la OLP no permitirá que *nadie* —ni el rey Hussein, ni los regímenes árabes— hable en nombre del pueblo palestino. Porque la OLP ha sido la *mayor conquista del pueblo palestino* en los últimos 18 años de lucha —la independencia en cuanto a la toma de decisiones, una organización autónoma."

El compañero Hassan Jabarin, dirigente de *Abna el-Balad*, resume así la situación de la lucha palestina tras la genocida agresión israelí a Líbano: "Con la heroica resistencia ofrecida por la OLP y el movimiento nacionalista libanés, el pueblo palestino está más unido que nunca y más comprometido con su dirección, la OLP".

"Reconocemos a la OLP", agrega, "como el único legítimo representante del pueblo palestino. Y seguiremos firmes en la lucha por un estado nacional palestino independiente bajo la dirección de la OLP. Puntualiza: "Esta Palestina democrática y secular —en la que conviviremos con los judíos israelíes— no podrá ser realmente democrática sin el socialismo, y el socialismo será la garantía de la democracia".



Hassan Jabarin durante su visita a México. (Foto Fernando Ruiz/BS)

solvió enfrentar esta situación y empezó a construir hogares sin el permiso de las autoridades", dice Hassan. "La mitad de Um el-Fahem la constituyen viviendas construidas sin permiso".

Claro que se ha desatado la represión. Las autoridades israelíes llevan a los palestinos a los tribunales por el "delito" de construir un hogar donde vivir, los hacen pagar elevadas multas y luego les dan un plazo de seis meses para conseguir un permiso, sabiendo que no lo van a conseguir.

"Si al cabo de seis meses no has conseguido el permiso, tienes que destruir tu casa con *tus propias manos*", anota amargamente Hassan. "Si no lo haces, ellos vienen con el ejército y con los *bulldozers* para destruir la casa, y tú tienes que pagar los gastos".

En cuanto a la salud, hasta 1956 se les impedía a los palestinos en Israel pertenecer al *Histadrut*, el sindicato oficial, que controla los servicios de salud oficiales. En 1956, después de una exitosa lucha, se les permitió afiliarse al *Histadrut*, y ahora la mayoría del pueblo palestino en Israel en principio tiene acceso a los servicios de salud oficiales.

"Pero en las clínicas a las que tenemos acceso", señala Hassan, "no hay suficientes médicos, los planteles son muy pequeños para prestar los servi-

fracasaron en este intento de obligarnos a dejar nuestras aldeas y nuestra tierra".

Los palestinos, la fuerza democrática más importante en Israel

"Hoy", señala Hassan, "estamos desarrollando nuestra sociedad. Hemos avanzado en nuestra conciencia, en nuestro nivel de actividad, en nuestra organización democrática y progresista. Ahora tenemos una organización política, como es el movimiento *Abna el-Balad*, surgido después de la derrota de los regímenes árabes en 1967 a manos de Israel".

Abna el-Balad nació para luchar por dos objetivos fundamentales, nos dice Hassan:

"Primero, para participar en la lucha de liberación nacional del pueblo palestino, que desde ese momento aparece como una lucha nacional palestina independiente, formando lo que hoy se conoce como la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

"Segundo, para defender nuestros derechos civiles, humanos, democráticos y sociales cotidianos en el estado israelí.

"Puedo decir sin temor a equivocarme que los palestinos dentro de Israel somos la *más importante fuerza democrática en ese país*. Nos estamos esforzando por reunir en torno nuestro

Reagan reanuda ayuda militar los dictadores guatemaltecos

Viene de la página 1

Por otro lado, el Frente Popular "31 de Enero" (FP-31) denunció que la fuerza aérea bombardeó 11 poblaciones y destruyó tres aldeas. La organización agregó que se continúa con el patrón de que la represión del ejército implica el asesinato de campesinos indígenas, la violación de mujeres y la destrucción de las miserables chozas.

A Reagan, desde luego, esto le importa un comino. Todo lo que le interesa es reforzar a la dictadura guatemalteca ante el avance de las fuerzas revolucionarias. Nada importa con tal de detener a "los comunistas". Como ya lo ha dicho en repetidas ocasiones, la lucha en Guatemala, como en cualquier otra parte del mundo, "se inscribe dentro de la pugna Este-Oeste", y en esa lucha todo se vale.

El momento que escogió Reagan para tomar la medida de levantar el embargo estuvo también determinada por lo que un vocero del Departamento de Estado calificó como "la preocupación acerca de las posibles iniciativas de paz que hubieran podido haber en la Isla Contadora". Se refería a la reunión de los cancilleres de México, Panamá, Venezuela y Colombia, la cual se pronunció por una solución política para la lucha en Centroamérica y contra la intervención extranjera en la región.

Lo que preocupa a Reagan es el aislamiento creciente en el que se encuentra su política agresiva y belicista. La "solución política" planteada

en la Isla Contadora, con todo y sus tremendas limitaciones, corre contraria al objetivo norteamericano de destruir militarmente las luchas populares en América Central.

Como era de esperarse, la iniciativa de Reagan ha encontrado fuerte oposición por parte de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que obviamente se encuentran indignadas. Pero la oposición es aún más amplia. Setenta y siete miembros de la Cámara de Diputados de Estados Unidos se oponen al reinicio del envío de armas y han iniciado la lucha en el Congreso para tratar de impedirlo.

El diputado demócrata por Iowa Tom Harkin, al explicar la iniciativa contra Reagan, afirmó que consideraba injustificado que Estados Unidos se apreste a "recompensar" a Ríos Montt por ser "particularmente eficiente en sus procedimientos de brutalidad" (Excelsior, 8 de enero).

En este momento resulta particularmente importante la campaña de solidaridad hacia la revolución guatemalteca que se realice en México, donde residen miles de refugiados. El ejército mexicano ha permitido en repetidas ocasiones que las fuerzas armadas de Ríos Montt penetren en territorio mexicano y secuestren a los exiliados. Esta forma de complicidad "pasiva" no puede ser tolerada. No se trata solamente de "la integridad del territorio nacional", sino de impedir que los asesinos busquen a sus víctimas en nuestro país.

Solidaridad continúa la lucha por su existencia

Por Manuel Acosta

El año nuevo en Polonia presenta para el movimiento obrero una situación que la camarilla de Januzelski estuvo preparando durante los últimos meses de 1982.

En octubre, la junta hizo aprobar en el parlamento una ley que disolvió formalmente el sindicato *Solidaridad* y que impuso serias restricciones al movimiento obrero, incluyendo su enclaustramiento en sindicatos controlados por el estado.

Este hecho motivó una respuesta sindical que contemplaba la realización de una huelga general de ocho horas el 10 de noviembre. La junta militar desató una fuerte campaña represiva que tuvo como resultado centenares de detenciones y la creación de un clima de terror. Ello, junto con la falta de perspectivas claras para la huelga, hizo que esta fracasara.

Con estos antecedentes, la burocracia vio la posibilidad de hacer ciertas "concesiones" para recuperar consenso, y lo-

mentar la división y el aislamiento de *Solidaridad*.

Así, el 11 de noviembre fue liberado Lech Walesa y posteriormente se anunció el levantamiento formal del estado de guerra, pero se mantuvo el estado de emergencia, las nuevas leyes restrictivas y el derecho de la junta militar de volver a imponer el estado de guerra si la situación lo amerita —entiéndase, según sus intereses.

Por su parte, la jerarquía eclesialista dio también su cuota de apoyo al régimen al llamar a los trabajadores a la calma y al entendimiento, a cambio de la anuencia de la junta para la visita del Papa a mediados de este año y de la propia liberación de Walesa.

Evidentemente, los "cambios" en la escena política en Polonia tienen el objetivo interno de sembrar ciertas ilusiones de una apertura democrática, pero también buscan aislar al movimiento obrero polaco de su apoyo internacional. Seguramente en un primer momento se crearán ciertas expectativas

en algunos sectores, pero finalmente las condiciones que están en el fondo de la crisis económica y política polaca persisten: la existencia de privilegios burocráticos, el control despótico sobre los sindicatos y la sociedad, y la falta de democracia obrera y organismos de autogestión.

Solidaridad, pues tiene ante sí la tarea de definir la estrategia y la táctica para luchar por recuperar los derechos conquistados en agosto de 1980, el derecho de huelga, el de manifestación y la propia existencia legal del sindicato; por obtener la liberación de presos políticos, condenados o no; por lograr la implantación de una república autogestionada, tal y como se marca en las resoluciones del primer congreso de *Solidaridad*.

Para poder emprender estas tareas, el movimiento obrero polaco debe contar con la solidaridad internacional de clase que impida el aislamiento al que quiere someterlo la junta y le permita mantener la confianza en sus propias fuerzas.

Las tropas soviéticas deben salir de Afganistán

El Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) apoyó hace tres años la intervención soviética en Afganistán. Esta fue una posición profundamente equivocada y fue corregida diez meses después. Sin embargo, si bien en algunos escritos del partido así se mencionó, nunca se hizo una corrección pública de esa posición. La importancia de la cuestión salta a la vista. Por eso ahora, a tres años de la intervención soviética en Afganistán, hacemos las siguientes consideraciones.

1. Una de las revoluciones más olvidadas en el mundo fue la revolución afgana de abril de 1978. El Partido Unidad Popular (PUP), dividido en dos tendencias —*Khalq* (Pueblo) y *Parcham* (Bandera)—, dirigió una revolución antifeudal y antimperialista. Con ella se llevaron adelante medidas que beneficiaron sustancialmente a las masas de ese país —en especial, la reforma agraria y el respeto a una serie de derechos democráticos.

Las dos tendencias se reclamaban marxistas y las dos mantenían una estrecha relación con el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS). Esa relación marcó enormemente a ambas tendencias. La forma en que llevaron adelante las reformas estaba preñada de un burocratismo extremo. Junto con esto, la lucha entre ellas degeneró hasta llegar al extremo de la violencia física, los asesinatos y los golpes de estado. Todo esto generó un descontento social inmenso, en tanto la política de las dos tendencias tenía por objetivo más el debilitamiento mutuo que la satisfacción de las necesidades de las masas.

2. La Unión Soviética siempre avaló la política burocrática de las dos tendencias. Estuvo de acuerdo cuando Taraki, líder de *Khalq*, exilió a Karmal, líder de *Parcham*. Después apoyó a Amin cuando éste dio un golpe de estado y asesinó a Taraki, y también apoyó, por medio de la intervención directa, a Karmal en su golpe en contra de Amin, golpe que culminó con el asesinato de éste.

En este sentido, el PCUS fue cómplice de toda una política de espaldas a las masas. Desde entonces, el ejército rojo está en



Guerrilleros afganos que combaten la ocupación soviética.

Afganistán masacrando a miles de pobladores de ese país.

3. El error fundamental del PRT consistió en tomar una perspectiva campista —error en el que normalmente cae el grueso de la izquierda. El problema fue ubicado incorrectamente a partir de lo turbulento de la zona. Se pensaba que el imperialismo yanqui estaba bastante avanzado en sus planes de intervención en contra de Afganistán. Hay que decir que el PRT siempre criticó la política soviética que condujo a la intervención, pero se pensaba que la presencia soviética aseguraba una serie de cambios estructurales que permitirían el surgimiento de un nuevo estado obrero, así como que con la profundización de las medidas económicas las masas afganas apoyarían al nuevo gobierno.

4. Lo que sucedió fue todo lo

contrario y hoy estamos presenciando el surgimiento de un nuevo Vietnam, con la diferencia de que ahora el ejército invasor es el soviético.

La inmensa mayoría de la población afgana repudia, ya sea de una manera activa o pasivamente, la intervención. Miles de pobladores son ahora guerrilleros que luchan por recuperar la soberanía nacional. Es verdad, sin duda, que los sectores más reaccionarios han aprovechado la situación y que la inmensa mayoría de la resistencia está vinculada a los islámicos más retardatarios. Pero hay que decir que esto es consecuencia de la política desastrosa del PCUS y del PUP.

Los efectivos soviéticos en Afganistán llegaron ya a los 105 mil. Se ha acusado a los soviéticos de la utilización de armas químicas, y si esto no ha podido

comprobarse, sí es seguro que el armamento que están utilizando es de lo más moderno.

5. Las repercusiones en la zona han sido lamentables. En Irán la inmensa mayoría de los sectores radicalizados repudian la intervención. Todo está jugando a favor del sionismo y del debilitamiento de los países islámicos. Ningún revolucionario honesto puede inspirarse en esa política soviética; nadie en esa zona puede hacer un trabajo de convencimiento de obreros y campesinos sin estar en contra de la intervención.

6. Ahora la URSS no sabe cómo salir del problema. Yuri Andropov discutió con el ultrarrepresivo dictador de Paquistán, Zia Ul Haq, sobre la posibilidad de una retirada parcial de Afganistán. El hecho es que la intervención soviética ha generado al nivel de los países la-

mados no alineados una división mucho más grande que la invasión vietnamita en Camboya. Por otro lado, entre los obreros europeos, la intervención en Afganistán y la política soviética en Polonia han provocado el inmenso desprestigio de la URSS, desprestigio que no tiene nada que ver con ilusiones en torno al capitalismo, pero que seguramente tiene relación con el tipo de socialismo por el que se lucha.

7. El carácter contrarrevolucionario de la política del PCUS se corroboró con esta acción. Porque de inmediato surgen varias preguntas: ¿Qué habría pa-

sado si esos 105 mil hombres en vez de ser enviados a Afganistán, hubieran ido a repeler la intervención sionista en Líbano? ¿Por qué a la Organización para la Liberación de Palestina solamente se le dio apoyo verbal? ¿Por qué no se declaró a los palestinos como parte inviolable del campo socialista? Eso sí habría prestigiado al PCUS.

Hoy exigimos el retiro de las tropas soviéticas de Afganistán, antes de que ya sea totalmente tarde. Esto iría en beneficio de Afganistán, de las corrientes revolucionarias de la zona, de la revolución mundial y, por todo ello, de la URSS misma.

BREVES MUNDIALES

Amplias movilizaciones en Italia contra los planes de austeridad

A partir del viernes 7 de enero, Italia vive nuevamente una oleada de movilizaciones obreras, desatadas por la decisión del gobierno de Amintore Fanfani de aplicar un plan de austeridad que afectará fuertemente las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores italianos.

Tras el anuncio del gobierno de introducir nuevos impuestos y de recortar el presupuesto para servicios, con sus negativas implicaciones, cientos de miles de trabajadores realizaron paros y movilizaciones decididos en sus asambleas y por los consejos de fábrica regionales.

El domingo 9 de enero, las tres centrales italianas —CGT, CGIL y UIL— acordaron la realización de una serie de paros escalonados, así como de huelga general, para el 18 de enero, con los objetivos de protestar contra la implementación del plan de austeridad y de hacer retroceder a la patronal en su ofensiva contra los trabajadores.

La dictadura militar argentina enfrenta fuerte oposición

Durante el mes de diciembre se desarrollaron en Argentina dos movilizaciones masivas en oposición a la política económica y antidemocrática del gobierno de la Casa Rosada.

El 6 de diciembre los trabajadores argentinos realizaron una huelga general, siguiendo la convocatoria de las dos facciones de la Central General de Trabajadores (CGT). La huelga fue decidida a raíz de los graves efectos de la crisis económica sobre los salarios y el empleo de millones de trabajadores argentinos, al igual que por las consecuencias de la política represiva del régimen, que tiene en su cuenta a decenas de miles de desaparecidos y a una legislación que niega derechos a las organizaciones sindicales y políticas.

Diez días después, el 16 de diciembre, 100 mil manifestantes marcharon por las calles de Buenos Aires en la "Marcha por la Democracia y la Reconstrucción Nacional", convocada por la Multipartidaria. Al poco tiempo de iniciada la marcha, las fuerzas represivas arremetieron contra los manifestantes, con un saldo de un muerto. La condena de las organizaciones políticas y sindicales de Argentina a la respuesta represiva del gobierno ha sido unánime, mostrando una vez más la plena impopularidad de que goza el gobierno.

El CUCUTAC en pie de lucha, pese a las provocaciones

Por Zelina Espinoza

TIJUANA, BCN.—El pasado 15 de noviembre, el comité de inquilinos agrupados alrededor del Comité Unión de Colonos de Tijuana AC (CUCUTAC) realizó en el centro de la ciudad una marcha multitudinaria para exigir al gobierno del estado la solución de la petición de terrenos que durante más de ocho meses estuvo gestionando ante la Promotora de Desarrollo Urbano de Tijuana SA (Produtsa). Ante el retraso de las autoridades correspondientes y cansadas de tantas promesas, 150 familias presentes en la asamblea general organizada ese mismo día decidieron tomar inmediatamente las tierras, como única forma viable de solucionar el problema.

El desempleo masivo y una inflación de más del 150 por ciento están llevando a la desesperación a miles de familias pobres del estado y de la zona fronteriza en general. El gobierno se ha mostrado incapaz de resolver el problema de la falta de viviendas, hoy agudizado por las últimas devaluaciones, ya que las rentas estipuladas en dólares no pueden ser pagadas ni con todo el salario mensual.

Las luchas por un pedazo de tierra y por los servicios públicos, así como los movimientos de resistencia contra los desalojos, están en el orden del día en el estado. Los colonos han aprendido en los últimos años que la organización y la movilización constituyen la única forma de frenar la política antipobladora del gobernador Roberto de la Madrid. Así lo han mostrado los movimientos contra el intento de expropiar los terrenos de Rosarito, contra el frustrado aumento al impuesto predial y para frenar la intervención de los anticorruptivos consejos de colaboración municipal (hoy consejos de urbanización), del mismo modo que la lucha llevada a cabo por la Federación de Colonias Independientes por la dotación de agua a las colonias pobres.

El CUCUTAC ha tenido parte importante en el movimiento de colonos a raíz de la lucha que sostuvo durante el periodo 1978-80 en contra de los desalojos en los cauces del Río Tijuana tras la apertura de las compuertas de la Presa Rodríguez. El mantenimiento de la organización fue vital para que las familias reacomodadas recibieran sus nuevos terrenos sin pago alguno. En 1981 el CUCUTAC volvió a enfrentarse a la política del gobierno al exigir servicios públicos y terrenos gratuitos para más de 100 familias de in-

quilinos que habitaban en la zona del río.

Hoy, más de mil familias desalojadas en 1971-73 de la zona del Río Tijuana y que recibieron terrenos en el Fraccionamiento Sánchez Taboada mediante contratos de crédito en dólares se han sumado al CUCUTAC. Además de la toma de terrenos mencionada, han efectuado una huelga de pagos contra Produtsa y exigen pagar los contratos a razón de 12.50 pesos por dólar.

Los colonos han debido enfrentarse no sólo al frío y al hambre, sino a las provocaciones de Produtsa y el gobierno. Al día siguiente de la toma, decenas de camiones oficiales transportaron a cientos de personas a la zona con el propósito de evitar la expansión de la toma de terrenos, y de provocar un enfrentamiento que justificara la intervención policiaca y el desalojo.

Esta intencionalidad, sin embargo, no ha tenido éxito y, por el contrario, ahora existe la posibilidad de que los cientos de familias de cuya necesidad de tierra pretende aprovecharse el gobierno para enfrentarse al CUCUTAC reconozcan que la organización en ésta es la vía para la solución de su problema.

El triunfo se empieza a sentir. Se han dado ya 400 notificaciones de lotes, aunque existe el riesgo de que sea desconocido el derecho de la mitad de las familias solicitantes.

El CUCUTAC seguirá en pie de lucha hasta que no quede un solo colono sin tierra. A la vez, se abocará a consolidar las formas de organización que responden al carácter actual del movimiento y a luchar por la unidad del mismo. Igualmente, seguirá participando en el Frente Nacional en Defensa del Salario, contra la Austeridad y la Carestía para luchar contra el alza de los precios y el desempleo que los colonos y trabajadores hoy están enfrentando.

Última hora

El martes 11 de enero se dictó auto de formal prisión contra Catalino Zavala y Luz María Uribe, dirigentes del CUCUTAC y militantes del PRT. Ya en el mes de diciembre habían sido detenidos por la policía, pero las protestas y movilizaciones habidas en Tijuana lograron su liberación. Ahora parece prepararse la justificación legal para encarcelarlos nuevamente. Se requiere de la más amplia solidaridad con el CUCUTAC y sus dirigentes para evitar esta nueva agresión.

Construir el FNCR en Durango, necesario

♦ Viene de la página 5

En el caso del PRT—de forma congruente con su participación en el FNCR—las demandas por las libertades democráticas y contra la represión tienen un lugar destacado en su programa. Podemos afirmar asimismo—con cierta carga de orgullo—que nuestro partido ha tenido una participación activa y permanente en la lucha contra la represión que se ha desarrollado en nuestro país antes, durante y después de la campaña electoral. Pero de esto no se desprende que la lucha contra la represión sea exclusiva del PRT o que nosotros reclamemos esa exclusividad. Todo lo contrario: nosotros siempre hemos llamado al fortalecimiento del FNCR, al que consideramos la estructura amplia y reconocida para impulsar la lucha contra la represión. Es precisamente la unidad de las fuerzas democráticas en la lucha contra la represión lo que le ha dado al FNCR su importancia y lo que ha permitido alcanzar la resolución de muchas demandas. La dirección del frente se da a partir de los acuerdos comunes del conjunto de las organizaciones que en él participan.

En tercer lugar, existe una actitud contradictoria de los compañeros del CDP hacia el FNCR. Declamamos más arriba que el FNCR se ha presentado como un organismo necesario y útil para el movimiento de masas; esto incluye también a la corriente política representada por el CDP de Durango. La Organización de Izquierda Revolucionaria—Línea de Masas (OIR-LM). A mediados de noviembre del año pasado, un importante número de compañeros del Frente Popular "Tierra y Libertad" de Monterrey fue detenido y encarcelado por la policía de la entidad. El mismo día en que, en una reunión con diferentes organizaciones en Durango, los compañeros del CDP calificaban al FNCR de ser un organismo "viciado" y se manifestaban en contra de participar en la formación del Frente Estatal contra la Represión, casi a la misma hora, representantes nacionales de la OIR-LM se dirigieron hacia el PRT y el FNCR—reconociendo a este último como el organismo representativo de la lucha contra la represión—para que intercedieran ante las diferentes instancias gubernamentales con el fin de lograr la libertad de los compañeros de Monterrey—cosa que, por lo demás, se consiguió inmediatamente.

Consideramos que situaciones como ésta no ayudan a avanzar en la lucha que por las libertades democráticas se desarrolla en nuestro país sino que, más bien, crean confusión en gran parte de las organizaciones democráticas, sobre todo en las que hasta la fecha no participan en el frente. Por lo mismo, llamamos a los compañeros de la OIR-LM—y particularmente a los del CDP de Durango—a conjuntar esfuerzos en la lucha contra la represión y a que se incorporen al FNCR.

Impulsemos el frente estatal

A lo largo de dos artículos hemos intentado exponer, aunque sea de una manera muy breve, cual es la importancia de la lucha contra la represión a nivel nacional y estatal. Desde nuestro punto de vista ha quedado clara la necesidad de agrupar al conjunto de las fuerzas democráticas de Durango en un organismo, vinculado nacionalmente al FNCR, que luche por la libertad de Héctor Carreón, que ponga un alto a la persecución de luchadores democráticos en el estado, que busque la presentación de los compañeros desaparecidos y que revierta toda la política represiva que se vive en Durango. Esta necesidad nos debe llevar a discutir de una manera seria, con la convicción de buscar la unidad de todas las organizaciones democráticas, los pasos concretos para la formación de ese organismo. Por nuestra parte—así como lo hicimos para la formación del frente estatal contra la austeridad—nos comprometemos a estar en la primera fila en el proceso de conformación del Frente Estatal contra la Represión. Por lo pronto, conjuntamente con los familiares de los compañeros detenidos-desaparecidos, hemos conformado el Comité Promotor de este frente, al que invitamos a incorporarse a todas las organizaciones y grupos democráticos de Durango.



Aniversario del fraude electoral en Tultitlán

Por Rodrigo Sagall y Sandra Villaseñor

SAN ANTONIO TULTITLÁN, Edo. de Méx.—El pasado 5 de diciembre, la población se concentró en la plaza principal de esta localidad para manifestar una vez más su repudio al PRI-gobierno y exigir el castigo de los representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio: Guillermo Vargas, ex presidente municipal, y Sergio Pérez Tovar, secretario general del sindicato de Goodyear Oxo, conocido por el fraude que cometió contra el sindicato, las viudas de algunos trabajadores y por haber orquestado el despido de aquellos que luchaban por la democracia sindical. Estos señores son los responsables de la agresión que sufrió el pueblo de Tultitlán.

El 5 de diciembre de 1981 se llevaron a cabo elecciones para presidentes municipales en el Estado de México. En Tultitlán, el pueblo se dio a la tarea de cuidar las urnas y estar al pendiente de cualquier intento del PRI-gobierno por cometer su acostumbrado fraude electoral, ya que la mayoría de electores apoyaban al candidato del Partido Acción Nacional (PAN). Cientos de personas se encontraban en las oficinas de la Comisión Local Electoral para ver y esperar el conteo de la votación cuando fueron sorprendidas por agentes policiacos que, aparte de robar las urnas, agredieron a la población dejando un saldo de un muerto y más de un centenar de personas heridas y golpeadas. Se sabe que los agentes cumplían las órdenes de Vargas y Pérez Tovar, quienes tuvieron que recurrir a estos métodos para imponer a su titeré, Francisco Valencia, como presidente municipal. Tales hechos se denunciaron en el Frente Nacional contra la Represión, y se realizó un mitin en el que participaron trabajadores despedidos de Goodyear Oxo, la Unión de Colonias Populares (UCP) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), entre otras organizaciones.

En el mitin de protesta y celebración combativa de este primer aniversario participaron el PAN y el PRT, que denunciaron los acontecimientos y exigieron castigo a los culpables. Los oradores del PRT exhortaron a la población de Tultitlán a luchar organizadamente contra las agresiones que a diario recibe: topes salariales, despidos masivos, alza del pasaje y de los precios de los productos básicos. ¡Amaron también a la formación de un frente contra la austeridad que nos está imponiendo el PRI-gobierno.

El acto finalizó con una marcha a las oficinas de la Comisión Local Electoral en la que participaron alrededor de 400 personas que coreaban consignas como: "¡Ante la represión, la movilización!", "¡Abajo, abajo, el plan de austeridad; luchemos, luchemos, por aumento salarial!". Ya en la Comisión Local Electoral se guardó un minuto de silencio por el compañero caído y, al grito de "¡El pueblo unido jamás será vencido!", se disgregó el contingente, dispuesto a continuar con su lucha.

Se constituyó el FNDSCAC en Sonora

Por Pascual Mora

HERMOSILLO, Son.—Casi dos horas después de lo previsto y a pocos minutos de haber sido superados los naturales temores de sus organizadores, dio comienzo el Encuentro Sindical y Popular por la Unidad. La cantidad de asistentes, su combatividad y su comprensión del planteamiento unitario permitieron constituir la Sección Sonora del Frente Nacional en Defensa del Salario, contra la Austeridad y la Carestía (FNDSCAC), con las bases necesarias para que podamos afirmar que la lucha contra la agresiva política de austeridad del gobierno mexicano ha dado en Sonora un sólido paso. La repercusión inmediata será la ampliación de las movilizaciones que, hasta antes de este acontecimiento, los diferentes sectores venían dando aisladamente.

El encuentro fue convocado principalmente por el Núcleo Promotor del Consejo de Lucha del Magisterio, el Frente Campesino Revolucionario Independiente, vanas colonias populares de la ciudad de Hermosillo, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Partido Obrero Socialista y la Corriente Socialista. Para su realización hubo que superar importantes obstáculos organizativos, pero quedó demostrado que la situación política exige una respuesta unitaria por parte de las grandes masas de explotados y las organizaciones políticas de izquierda.

A última hora y por razones en ese momento incontrolables, los autobuses que debían transportar a los contingentes



de Ciudad Obregón y de las colonias periféricas de Hermosillo no estaban listos, por lo que la incertidumbre era el sentimiento que imperaba entre los más puntuales. Sin embargo, los luchadores sindicalistas, colonos, campesinos y estudiantes llegaron por sus propios medios hasta llenar el Auditorio Cívico del Estado (el centro de reuniones más grande de Hermosillo). En ese lugar fueron presentadas y discutidas las diferentes ponencias y posteriormente elaborados acuerdos y conclusiones.

El acuerdo fundamental fue la constitución formal de la Sección Sonora del FNDSCAC. Llegar a ello no fue, sin embargo, un camino fácil, como tampoco lo será su consolidación. Pese a los sentimientos unitarios que existen en el conjunto de las masas explotadas—durante golpeadas por las secuelas de

la crisis de la sociedad capitalista—el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) ha mantenido en la región la posición ya de sobra conocida a nivel nacional de impulsar una organización paralela que, indudablemente, burla los esfuerzos y pone trabas a las posibilidades de ofrecer al estado burgués un solo frente de lucha. El PSUM antepone su típica postura colaboracionista de clases a los intereses de la lucha independiente que los explotados han puesto de manifiesto en la calle, las colonias, las fábricas y el campo.

En este caso, el Encuentro por la Unidad ha sido un elemento definitorio. La receptividad con que su llamado obtuvo ha sido un duro golpe para las actitudes divisionistas. Esto obligó a los representantes de las organizaciones influidas por el PSUM—que asistieron en cali-

dad de observadores—a admitir la importancia de este acto y a reconocerlo implícitamente como la alternativa de lucha unitaria que requiere el momento político. Aún así, pese a este reconocimiento—que indudablemente fue producto de la presión de la impactante presencia de cerca de 500 luchadores provenientes de la mayoría de los sectores explotados—, sabemos que no está dicha la última palabra para terminar con la absurda política divisionista que impulsa el PSUM.

La respuesta, ya lo dijo el Encuentro por la Unidad, es no la polémica estéril o la retórica fácil, sino los hechos. Por eso, la Sección Sonora del FNDSCAC está fundamentalmente abocada a poner en práctica el plan de acción que se aprobó en el encuentro el pasado 28 de noviembre. Se realizarán actos conjuntos para exigir la solución de la huelga del Colegio de Bachilleres de Sonora. También se organizarán acciones de solidaridad con el campesinado—que en el último periodo se ha enfrentado a una escalada represiva del gobierno de Samuel Ocaña—, y para obtener la satisfacción de la demanda de lotes y servicios para las colonias populares.

El frente, por lo tanto, se ha concretado en un programa de propagandización, agitación y movilizaciones que lo colocan como el eje de las luchas que los explotados de la ciudad y el campo dan en estos momentos contra las salvajes opresión y miseria a que los somete el régimen capitalista.

Difíciles, las condiciones de lucha de trabajadores de la industria huleira

Por Clara Román

La industria huleira mexicana (de llantas y cámaras fundamentalmente) se integra realmente por seis firmas, de las cuales cinco son directamente transnacionales. Estas cinco empresas participan con el 90 por ciento de la producción y ventas en el mercado interno, y por orden de importancia son: Goodyear Oxo (22 por ciento), Goodrich Euskadi (18 por ciento), Firestone (16 por ciento) y Uniroyal (16 por ciento). Tórnol, la única empresa nacional, sólo participa con el 10 por ciento de la producción y ventas.

La producción, según los datos de 1980, es de 6 millones de neumáticos, mientras que la demanda anual es de 7 millones 575 mil neumáticos. De ahí que se cuente con una producción deficitaria en un 15 por ciento, ya que la demanda aumenta a ritmos superiores que la producción. Esto ha repercutido en un aumento de los precios del 34.6 por ciento y en que se tengan que realizar importaciones complementarias.

La industria huleira también es dependiente por lo que respecta a la importación de materias primas y productos intermedios, y, evidentemente, a nivel tecnológico. Estas importaciones hacen también que el precio del hule se incremente; por ejemplo, tan sólo las importaciones de caucho ascienden a más de mil millones de pesos. Por otro lado, casi la mitad de la producción se comercializa directamente con las armadoras de automóviles como la Chrysler, Ford Motor Co. y la General Motors.

Esta monopolización en la in-

dustria huleira hace que se comporte de acuerdo a los intereses de las matrices en Estados Unidos. Esto significa una limitante para los trabajadores de estas empresas en México, ya que cada vez que se ha tenido una situación de huelga, inmediatamente se han enfrentado con el sabotaje que representa la importación masiva de llantas. En esas ocasiones el gobierno ha actuado como cómplice de las compañías al reducir los impuestos e incluso desaparecer los aranceles de importación, como lo hizo durante la huelga de 1981.

De esta manera, las empresas se han sentido fortalecidas y han mantenido actitudes intransigentes, por ejemplo ofreciendo aumentos de salarios ínfimos.

La eficacia de la huelga también ha sido disminuida por las propias direcciones sindicales, que han mantenido inmovilizados a los trabajadores de base, sin ejercer una presión política sobre los patrones. Esto ha sido propiciado por el bajo nivel de conciencia y lucha de los trabajadores, que ha permitido a los dirigentes aprovecharse del sentimiento de "aristocracia obrera" (mucho mejor pagados) que priva entre los propios trabajadores.

Una de las características fundamentales a través de la cual la industria huleira obtiene grandes márgenes de ganancia es el proceso productivo, que establece como norma el trabajo a destajo en la línea de producción en casi todas las empresas. Esta jornada de trabajo a destajo hace que fácilmente se les impongan a los trabajadores mayores ritmos de producción, en forma constante y

sin una necesaria correspondencia a nivel salarial.

Algo que podemos deducir es que, si bien los trabajadores de la industria huleira se cuentan entre los "mejor" pagados, esto se debe a que las empresas se ven más que compensadas con el incremento en las cargas de trabajo y las pésimas condiciones de trabajo y seguridad, que son la contraparte del salario alto y constituyen la base de una mayor explotación.

La mayor parte de los trabajadores huleiros se encuentran sindicalizados en la Confederación de Trabajadores de México (CTM), a excepción de Euskadi, que rompió con dicha central en 1958 y posteriormente pasó a formar parte de la Unidad Obrera Independiente (UOI) hasta mediados de 1982, cuando se separó también de esta organización y quedó como sindicato independiente (asesorado por Héctor Barba).

El grado de dispersión a nivel organizativo de los trabajadores de la rama se ha tratado de compensar con la existencia de un contrato ley entre las distintas empresas y sus sindicatos, según el cual rigen sus relaciones y que opera en toda la industria huleira agrupando a los trabajadores en la Coalición de Trabajadores de la Industria del Hule. Evidentemente, la coalición se encuentra copada por burocratas sindicales de la CTM. Por ejemplo, el actual presidente de la coalición es el secretario general de la Goodyear Oxo (ex diputado federal del PRI), que se ha mantenido en ese cargo en su sindicato desde hace 13 años y es el representante de la CTM a nivel regional. Al entretenerse el poder sindical con el poder municipal,

este señor controla los municipios industriales de Tultitlán y Cuautitlán.

A pesar de que en los demás sindicatos el control de los burocratas sindicales ha sido más o menos similar (de 10 a 13 años), a mediados de los años 70 se dieron luchas por cambiar este funcionamiento. Esto se expresó incluso con el cambio de comités completos —en el sindicato de General Poppo en 1975, en el de Uniroyal en 1976, en el de Firestone en 1979, igualmente en Tórnol y Euskadi en 1981. Sin embargo, estos intentos no han logrado cristalizar en proyectos de democracia a más largo plazo, y se ha vuelto a una situación parecida a la anterior. La excepción ha sido Euskadi, pero si este sindicato no logra formar cuadros de recambio al interior del sindicato, consolidar a los ya existentes y englobarlos en un proyecto de democratización e independencia política que contemple al resto de los trabajadores de la industria huleira y avance en su fusión organizativa, le será muy difícil avanzar en su propio proyecto, ya que las limitantes presiones de la patronal y los charros serán cada día más fuertes.

Trabajadores del PRI descontentos por sus condiciones de trabajo

Hace pocos días se presentó en nuestra redacción un trabajador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y solicitó que publicáramos en Bandera Socialista la información que a continuación aparece. Por razones fáciles de comprender no damos a conocer su nombre.

Los trabajadores del PRI no hemos recibido ningún ajuste salarial de los que han sido otorgados a los demás trabajadores de México. Como no existe escalafón ni reconocimiento alguno, podemos llevar años laborando y no recibir ninguna prestación por antigüedad, mientras que los jefes contratan empleados de confianza cuando se les antoja y los colocan por encima de nosotros con sueldos muy altos.

Una molestia especial la representan los elementos de "seguridad" que ejercen una excesiva vigilancia contra los trabajadores. Estos señores, vestidos de civil con traje café o gris, pasan por las oficinas desde muy temprano y después se quedan a "vigilar".

Los trabajadores, principalmente los de intendencia, tenemos que soportar el despotismo de los jefes. Como regla general, las decisiones que nos afectan se toman sin considerar para nada la opinión de los empleados.

Cuando les conviene a los jefes, nos consideran "colaboradores", y por lo tanto no tenemos derecho a formar un sindicato ni a huelga. Pero eso sí, siempre se nos exige como a empleados, que en realidad somos:

Toda esta situación hace que exista un gran descontento entre los trabajadores del PRI, pero muchos no saben qué hacer. Estamos desunidos porque hay miedo, ya que casi todos tenemos familia y este trabajo es nuestro único sustento. Hace años se intentó formar un sindicato, pero no se logró, y fueron despedidos varios "colaboradores".

El anterior director administrativo, ingeniero Alonso Bretón, siempre tuvo las puertas cerradas para los "colaboradores". Su política fue no acceder a ninguna demanda y nos negó toda ayuda. Con el nuevo presidente del PRI, Adolfo Lugo Verdugo, las cosas no pintan mejor, pues ahora se pretende imponer un nuevo reglamento que es completamente arbitrario.

Huelga en Fume para evitar el saqueo patronal de la maquinaria

Por Roberto Moreno y Clemente Parra
TIJUANA, BCN.—Desde hace un mes y medio, los trabajadores de Fundidora Mecánica (Fume) se vieron en la necesidad de estallar la huelga para impedir que el patrón, Miguel Gutiérrez, sacara la maquinaria a sus espaldas y dejara a más de 200 familias sin medios de subsistencia.

El cierre y el saqueo de la maquinaria a espaldas de los trabajadores, sin embargo, no es solamente el caso de Fume en este periodo de crisis. Tan sólo en este estado, dos maquiladoras, una en Mexicali y otra en Tijuana, han cerrado en 1982 aprovechando la oscuridad de la noche, dejando a los trabajadores sin empleo y sin indemnización.

La huelga de Fume impidió que se repitiera esta historia, pero ahora el gobierno y los charros se han dado a la tarea de desmoralizar a los trabajadores. Han declarado que el caso está perdido y tratan de impedir que circule información sobre el conflicto.

Los trabajadores de Fume, ante esto, han constituido un Comité por la Defensa del Trabajo.

La solución favorable al conflicto de Fume atañe a todos los trabajadores y desempleados. Cualquier ayuda para el sostenimiento material del movimiento puede enviarse a: Calle 8 número 1530, Colonia Obrera, Ensenada, Baja California.

Las autoridades no resolverán los problemas de los telefonistas

Por Raúl Muñoz

MEXICO, DF.—El 16 de noviembre se llevó a cabo una asamblea de los trabajadores del Departamento de Conmutadores de Teléfonos de México. El punto central fue si debía entablarse una demanda contra el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del sindicato para resolver el problema de la reincorporación del departamento a esa organización o si se debían continuar las negociaciones con el secretario general, Francisco Hernández Juárez.

Algunos compañeros plantearon que no se debía tener acercamiento alguno con el CEN, pues en una reunión que tuvieron representantes del departamento con Hernández Juárez éste había asumido una actitud agresiva. Proponían, en cambio, que se entablara una demanda contra el CEN ante las autoridades laborales, para "dejarlo mal parado" ante ellas.



En dónde encontrarnos

Si estás de acuerdo con lo que planteamos en este periódico, ¡junte al PRI si deseas más información, puedes escribirnos (a nombre del director de Bandera Socialista) al Apartado Postal 111-007, CP 06880. También puedes acudir a uno de nuestros locales en las siguientes direcciones:

BAJA CALIFORNIA NORTE: Mexicali: Ejército Trigarante 399, Colonia Insurgente. Tijuana: Av. G 194 (entre Primera y Coahuila). Ensenada: Octava 1530 y Guadalupe, Colonia Obrera.

BAJA CALIFORNIA SUR: Ciudad Constitución: Juárez y Morelos. La Paz: Reforma y Guillermo Prieto, tel. 2 93 34.

COAHUILA: Mocimbo: Boulevard Harold R. Pape 135 (a la altura de Ramos Arizpe). Torreón: Rodríguez 151 Norte, Colonia Ana.

CHIAPAS: Tonala: Manzana 3 Lote 4, Colonia Ferrocarrileros, tel. 3 13 17. Tuxtla Gutiérrez: 1a. Norte-Oriente 1033.

CHIHUAHUA: Ciudad Juárez: Ignacio Alatorre 538,

tel. 4 85 39.
DISTRITO FEDERAL: Pimentel 94-4, Colonia San Rafael. San Antonio Abad 254, Colonia Vista Alegre, CP 08860, tels. 530 26 50, 530 28 33, 530 29 72, 519 73 51.

GUERRERO: Chilpancingo: Amado Nervo 18, tel. 2 59 73. Iguala: Matamoros 45, tel. 2 34 19.

JALISCO: Chihuahua: Calle General Barragán 8.

HIDALGO: Ciudad Sahagún: Calle G-12, Colonia Abecedario.

MEXICO (EDO. DE MEX.): Cuautitlán Izcalli: Cedro 236, Colonia La Aurora. Carretera México-Cuautitlán 88, Colonia Loma Bonita Ecatepec de Morelos: 6 Sur 36-A, Colonia Nuevo Laredo (a una cuadra de la carretera México-Pachuca). Toluca: Venustiano Carranza 204 - A Poniente. San Mateo Atenco: Juárez 72.

MORELOS: Cuernavaca: Avenida López Mateos 131 - 5 (lado norte del Centro Comercial).

QUEZARU: Monterrey: Antonio Joaquín Pérez 1079, Colonia Niño Artillero, tel. 42 89 76.

OAXACA: Oaxaca: Crespo 401, esquina con N. Bra-

vo.
PUEBLA: Puebla: Reforma 338 - 1, tel. 46 66 93.

SAN LUIS POTOSÍ: San Luis Potosí: Callejón del Carño 155 (a un costado de la Avenida Venustiano Carranza).

SINALOA: Culiacán: Calle Sexta Número 79 - 2 Colonia Tierra Blanca.

SONORA: Ciudad Obregón: Coahuila 729 Sur. Hermosillo: Yañez 120, casi esquina con Oaxaca. Nogales: Callejón Miguel Hidalgo 378 (atrás del Cine Gemelos).

TAMAULIPAS: Ciudad Victoria: 6 Juan José de la Garza y Mutualismo 415, Colonia Mainero. Domicilio conocido, Colonia Echeverría. Matamoros: Calle 6a 36 (entre Terán y Juárez).

VERACRUZ: Jalapa: Justino Sarmiento 37, tel. 5 75 61. Minatitlán: 18 de Octubre 43, Colonia Santa Clara. Palmirillo: Kilómetro 73 de Carretera Federal Córdoba-Veracruz, domicilio conocido, Municipio de Cotaxtla.

ZACATECAS: Zacatecas: Calle del Niño 507, interior 2.

Esta posición es incorrecta porque presupone que las autoridades laborales se interesan realmente por defender los derechos de los trabajadores y sirven para resolver las injusticias que se cometen. En realidad, tanto esas autoridades como el gobierno que las puso son enemigos más peligrosos para el sindicato y los trabajadores que el propio Hernández Juárez.

Durante el pasado movimiento se cometió el error de confiar en que las autoridades fallarían a favor de la oposición. Se vio que no era así, a pesar de que existían condiciones de fuerza mucho más favorables que ahora. El gobierno no sólo no apoyó las reivindicaciones que se planteaban, sino que incluso requirió la empresa, en un abierto desafío a los trabajadores.

Una lección que ya debió quedar clara es que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no tiene el carácter conciliatorio que se supone. Por el contrario, ha sido fiel aliada del CEN y, peor aún, de la empresa. No existe ni la más remota posibilidad de que semejantes instancias resuelvan la situación interna del sindicato. Al abrirles la puerta sólo les facilitamos alcanzar su objetivo —permanente e inmutable— de dividir al sindicato para destruirlo. Esto es también lo que pretende la empresa.

Por lo demás, entablar la demanda contra el CEN significaría repetir el error de considerar que el enemigo a derrotar es el comité de Hernández Juárez y no la empresa.

La política correcta, en cambio, consiste en dirigirse a todos los trabajadores del sindicato para organizar una lucha lo más amplia posible por el regreso de todos los compañeros, con pleno goce de sus derechos. Esta es una forma, al mismo tiempo, de defender mejor los intereses del conjunto de los trabajadores.

Este es el momento no de poner condiciones al CEN, sino de negociar con él. En este sentido el resultado dependerá de la importancia que tengan las fuerzas que se logren agrupar. Así se evitará también el peligro de que muchos trabajadores sigan un camino diferente.



Oportunismo y sectarismo del POS

La carta que publicamos a continuación fue enviada por un grupo de compañeros expulsados del Partido Obrero Socialista que recientemente han decidido ingresar al Partido Socialista Unificado de México (PSUM). La dirigieron el camarada Sergio Rodríguez, dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), para comentar dos artículos, firmados uno por él y otro por Edgard Sánchez, en relación a su caso.

Compañero Sergio:

Queremos, en primer término, los que escribimos la carta publicada en el diario unomásuno, agradecer la atención que pusieron como organización política a la misma. Producto de esta carta, los que la suscribimos fuimos posteriormente objeto de ataques calumniosos por parte del Partido Obrero Socialista (POS), principalmente el compañero Manuel Crisóstomo. Ya preveíamos los ataques calumniosos dados las características del POS.

Sería ocioso para nosotros entrar al terreno de las aclaraciones, pues lo que teníamos que aclarar fue hecho de manera oportuna ante el exabrupto fraccional del POS, el oportunismo de dicho partido y su política sin principios. No utilizaremos las declaraciones en la prensa nacional, aunque bien podríamos hacerlo si de eso se tratara para evidenciar a esa organización política; pero sería fiarse de los medios masivos de comunicación y, desgraciadamente, usted sabe —y todo mundo— que eso no puede ser.

Nuestra base parte de los documentos que como organización suscribimos. Y en eso el POS tiene mucha cola que le pisen pues, no obstante la alharaca que ha hecho, desde mucho tiempo atrás tenía una "caracterización" del PSUM similar a la de usted. Tienen mucha razón, tanto usted como Edgard, en tacharlos de oportunistas y de grupúsculo que pasará a vivir de denunciar al PSUM. Es el infantilismo de izquierda, la inmadurez política que genéricamente alcanza a esa corriente internacional del trotskismo.

Parte de estos ataques provienen de la concepción falsa de que el "estalinismo" —en este caso sería el PSUM— es uno de los principales obstáculos para construir una organización trotskista de masas. No, compañeros del POS, no es eso: es la falta o, mejor dicho, la incapacidad que tienen para hacer política. Ustedes creen (los del POS) que política es levantar demandas, acuhar consignas radicales sin una política estructurada. La agitación, efectivamente, es parte de nuestra lucha por el socialismo. Pero dejarlo en ese nivel es castrar al movimiento de masas en la lucha por su liberación. Los obreros no lucharán por un 50 por ciento de aumento salarial con una táctica panfletaria. Se necesita más que eso. El radicalismo verbal de nada le sirve a las masas. La consigna de "Patria Libre o Muerte" de nada le hubiera servido al Frente Sandinista de Liberación Nacional si atrás no hubiese tenido toda una política estructurada. No, lo otro

no es política, es mero activismo, es empirismo puro —por cierto, a lo más que pueda llegar el POS.

El "iluminado", como usted le llama, muy poco ayuda en política. Su principal mérito ha sido romper partidos y de conjunto la Cuarta Internacional. Por eso todo lo que haga esta corriente internacional no es para extrañarse ni de tomarse en cuenta, a menos que sea realmente a la hora de trabajar por la unidad del movimiento, por el no fraccionalismo, por una política en serio principista y no oportunista. No por unidades absurdas y sectarias, como el llamado a formar el frente único trotskista, al que seguramente el PRT y la LOM [Liga Obrera Marxista] no verán con buenos ojos, pues no es posible que una organización, después de venir de toda una serie de rupturas provocadas por ella misma y con acusaciones —en el caso de ustedes, de "pactar con el gobierno"; en el caso de la LOM, de revisionistas y claudicadores al gobierno de Mitterrand—, llame a la unidad. ¿Con qué cara? El cinismo es otra de sus características. Esa es otra patraña del "iluminado".

Romper y calumniar para después demagógicamente llamar a la "unidad"

Pero regresemos otra vez a su primer artículo y a nuestra carta. En primer término, cuando hablamos del sectarismo del trotskismo efectivamente generalizamos, y es porque consideramos en nuestro balance que el trotskismo es sinónimo de sectarismo. Y no lo hacemos por atacarlo, como dice el POS, sino que forma parte de una caracterización política que parte fundamentalmente del dogmatismo con el que se conducen las organizaciones trotskistas, no sólo aquí en México, sino en el mundo. Este ha sido el principal obstáculo para el trotskismo y lo que le ha impedido construir organizaciones de masas. Porque el dogmatismo no es dialéctico, y si no es dialéctico, no es revolucionario, y si no es revolucionario es incapaz de insertarse en el movimiento de masas. Para nosotros los apellidos pasaron a un tercer o cuarto plano. Si ustedes consideran que es necesario ponerse el apellido o seudónimo de alguien, por muy importante que éste sea o haya sido, no están colaborando sino con la división y el sectarismo. No por ponerse apellidos y declararse herederos del bolchevismo se es revolucionario. Si nuestra táctica y nuestros métodos de lucha difieren con otras organizaciones de izquierda, esto no justifica el mermatismo.

Por eso nuestra defensa del PSUM no es consciente o inconsciente. Es totalmente consciente, y ese fue uno de los motivos por los cuales ingresamos al PSUM: el rebase del dogmatismo y la lucha por construir realmente un partido de masas. ¿Que no lo es en este momento? Eso es otra cosa. No lo es en este momento, pero quiere ser, y no nada más con los que están, sino con todos aquellos que quieran estar. No ingresamos tampoco sin antes conocerlo por dentro. No vimos el estalinismo por ningún lado. Lo que si vimos fueron muchos documentos con elaboraciones políticas, vimos proyectos de unidad serios y avanzados para el movimiento de masas no vanguardistas. ¿Que no hay fracciones legalmente constituidas? No hacen falta. Son dañinas y el PRT tiene amargas experiencias de ellas. A cambio de eso hay prácticas mucho más sanas, como es la de expresar libremente su posición política, no nada más internamente, sino también hacia fuera. No, aquí ya no se privatiza el derecho de decir solamente nosotros somos revolucionarios, como sucede con algunas organizaciones como el POS. No, nosotros si creemos que aparte de los pecos hay otros pájaros verdes.

Hay otra parte de su artículo en el cual habla también del oportunismo del PSUM. Los términos en los que usted habla del oportunismo del PSUM no son los que mejor convienen a su organización. En ese caso, el PRT también lo fue, pues recordarán que también ustedes buscaron la alianza con el POS —en el caso concreto, algunos militantes del PRT hablaron con nosotros para tratar de hacer alianza electoral, así como la dirección de su partido habló con la dirección del POS para lo mismo. No puede hablarse de que el PSUM buscó debilitar al PRT en cuanto al número de votos. Los votos del PSUM hubieran sido los mismos con el POS que sin el POS. No fue el PSUM el que anduvo corriendo tras el POS, sino el POS el que se arrojó a los brazos del PSUM, y usted y toda la izquierda saben por qué.

Para finalizar, dos cosas. Una es que el PRT debe definir su política en todos los terrenos, porque las alianzas deben tener una línea consecuente y no de bandazos. Lo decimos porque lo que define una alianza es una política a nivel nacional y no solamente en sectores. Creemos que no es correcto tener alianzas en Guerrero y andar a la greña en CU [Ciudad Universitaria]. Además, hoy más que nunca será necesaria la unidad de las organizaciones revolucionarias de izquierda que acaben con los ataques canibalescos. Unidad con todos los que estén dispuestos a luchar por el socialismo en México, no la unidad de un frente único trotskista. Eso es sectario y absurdo.

La segunda cosa es la defensa de los compañeros Crisóstomo se hace por parte del PRT. Es totalmente válido exigirle a estos aprendices de política que se retracten de lo dicho, que desechen el método de la calumnia o, efectivamente, nosotros también iniciaremos una campaña pública y en las bases del POS, porque es necesario sanear a la izquierda de estos métodos.

Se despiden fraternalmente, Chucho, Matías, Katty, Patricia, Armando y Crisóstomo

¿Quiénes son sectarios y oportunistas?

Por Sergio Rodríguez y Edgard Sánchez

La carta de los compañeros expulsados del POS plantea algunos aspectos que es necesario abordar.

En primer lugar, sobre la defensa de la política electoral del PSUM que hacen los compañeros. Para nosotros, el acuerdo electoral entre el PSUM y el POS fue un matrimonio de conveniencia. El POS sabía lo que contenía el programa del PSUM. Siempre lo ha sabido y su sorpresa sorpresa después de la nacionalización de la banca fue sólo el pretexto para romper; buscaba crearse una imagen izquierdista después de haber conseguido lo que quería.

Pero el PSUM también conocía al POS. Los compañeros dicen que "Los votos del PSUM hubieran sido los mismos con el POS que sin el POS". Si esto es cierto, ¿cuál era el interés por la alianza? No lo era programático, pues ambas organizaciones sabían de sus diferencias. El del POS no era el caso del Movimiento de Acción y Unidad Socialista (MAUS) o del Partido Socialista Revolucionario (PSR), que en 1979 llegaron a acuerdos ventajosos con el Partido Comunista, pero sabiendo éste de las posibilidades de realizar acuerdos de fondo a largo plazo. En el caso del POS no podía haber ilusión alguna de que se incorporara al PSUM. La alianza oportunista con el POS, el aceptar incluir en la lista plurinominal a un candidato del mismo en buen lugar, tenía por objetivo comprar la imagen "trotskista" del POS para combatir a la otra opción de la izquierda en las elecciones, la del PRT.

Por eso, en el matrimonio de conveniencia, ambos partidos pagaron un precio. El POS al aislarse durante la campaña electoral del medio de izquierda donde se había desarrollado, y el PSUM con el escándalo que ha querido hacer el

POS con su ruptura. Maniobras, y no acuerdos serios, es lo que estaba de por medio. El POS deberá pagar más todavía, pues después de su efímero escándalo ha quedado evidenciado que no es un partido con el cual puedan hacerse acuerdos confiables.

El otro tema en debate es el supuesto carácter sectario del trotskismo. Los compañeros extrañan su experiencia al conjunto del llamado movimiento trotskista. Ellos hicieron su experiencia precisamente con el sectarismo trotskista que representa la corriente del POS.

Sin embargo, deben recordar que el debate último con esa corriente dentro del PRT y que por cierto sirvió de pretexto para su escisión (que incluyó a la mayoría de los compañeros firmantes de la carta) fue precisamente sobre el sectarismo. No han sido el PRT o la Cuarta Internacional quienes piensan que los únicos pájaros verdes son los pericos. Fue esta corriente, de la que los compañeros formaban parte en el '79, la que consideró que los sandinistas no representaban una línea revolucionaria. Este sectarismo llevó a la escisión y después, con la enfermedad en sus propias filas, a nuevas rupturas del POS.

Esto es lo que nos lleva a admitir, igualmente, que en las filas del PSUM existen compañeros revolucionarios con los cuales será posible encontrarnos en algún momento. Pero al mismo tiempo a afirmar que no es posible considerarnos revolucionarios al programa y la línea de ese partido. Porque el estalinismo no es sólo métodos organizativos sino, ante todo, un programa.

En cuanto a la defensa del compañero Crisóstomo ante las calumnias del POS, reiteramos que nuestra oposición a tales métodos es independiente de la posición política del compañero afectado. No defendemos su posición política, sino su derecho a discrepar sin ser calumniado como una vía para descalificarlo.

Declaración de ex miembros de la Brigada Simón Bolívar

Compañero Edgard Sánchez, Director de Bandera Socialista:

Envío a usted la declaración que firmo como ex miembro de la coordinación de la Brigada Simón Bolívar, con la solicitud de que sea publicada en Bandera Socialista. Con un saludo revolucionario.

Darío González P.

Durante todo el año de 1982 en Nicaragua, las acciones de la contrarrevolución han venido tomando formas más amplias y agresivas. Decenas de militantes sandinistas han sido asesinados por grupos de ex guardias somocistas que entran a Nicaragua desde los campamentos que mantienen en territorio de Honduras.

La "contra" busca establecer bases de apoyo dentro del país, en el Departamento de Celaya y en la región de la minoría de los miskitos. Lo que inmediatamente después de la derrota de Somoza no pasaba de ser una labor de hostigamiento ejercida por los restos de un ejército destruido ahora adquiere la significación de punta de lanza de una contraofensiva general contra la revolución nicaragüense que es promovida por el imperialismo norteamericano, con el apoyo de los ejércitos y de los gobiernos de la región, en combinación con la burguesía nicaragüense.

La derrota del gobierno sandinista no es sólo un objetivo proclamado por Reagan desde la campaña electoral de 1980. Para el Departamento de Estado, "normalizar" la situación en Centroamérica supone aplastar el levantamiento armado en El Salvador y Guatemala, pero ante todo implica la lucha por todos los medios posibles para que la revolución nicaragüense sea aislada y luego derrotada. El curso seguido por la lucha de clases, la ruptura de la burguesía nicaragüense con el Consejo de Estado y con el Gobierno de Reconstrucción Nacional, la defensa sandinista de sus derechos de independencia nacional, la constitución de un gobierno obrero y campesino, conforman una situación intolerable para el imperialismo y la burguesía de la región y en esa medida conducen a tensiones que van a ser cada vez mayores.

Una guerra civil generalizada en Centroamérica no es una simple perspectiva. El Pentágono ha venido entrenando, armando y en parte dirigiendo al ejército de Honduras para hacer de él un gendarme en la región. La dictadura fascista de Guatemala también es reforzada. La intervención conjunta de estas fuerzas se mostró en toda su magnitud en las operaciones realizadas contra la guerrilla salvadoreña a finales del año 1982. En la región de Morazán actuaron de manera cotidiana cerca de 10 mil hombres del ejército salvadoreño y 2 mil hondureños.

La escalada imperialista contra la revolución nicaragüense pone al orden del día la más amplia solidaridad internacionalista. Quienes fui-

mos los principales responsables de la Brigada Simón Bolívar en el Frente Sur, cuando la ofensiva final contra Somoza, hemos considerado pertinente hacer este pronunciamiento en razón de la gravedad de la situación, pero también para expresar nuestro rechazo a la pretensión de algunos de reconstruir en el momento actual una Brigada "Bolivariana", o cosa por el estilo, ligada de alguna manera a Edén Pastora.

Edén Pastora cumplió su papel revolucionario en el Frente Sur y ahí fue quien facilitó la vinculación de muchos internacionalistas, entre ellos, miembros de la Brigada Simón Bolívar. Ahora su posición ha cambiado. Ha adoptado una política que entra en el juego de la contrarrevolución y en los planes de la burguesía nicaragüense encabezada por Robelo. Aprovechando su trayectoria, Pastora actúa en Costa Rica y Centroamérica como opositor supuestamente democrático del gobierno sandinista y, junto con otros ex dirigentes del FSLN [Frente Sandinista de Liberación Nacional], hace un trabajo que sólo sirve a los enemigos de la revolución. Individuos que tuvieron relación con las brigadas internacionales y que chocaron con la dirección sandinista tienden a aglutinarse alrededor de Pastora (particularmente en Costa Rica y en Panamá).

La perspectiva de graves conflictos en la región y la amenaza de guerra contra Nicaragua nos obligan a condenar abiertamente toda tentativa de utilizar la experiencia de las brigadas internacionales en una dirección que no sea la defensa incondicional de la revolución y de sus conquistas o que no resulte de actividades disciplinadas a las orientaciones prácticas dadas por el FSLN para enfrentar la agresión. Por lo que a nosotros respecta, la Brigada Simón Bolívar fue disuelta en 1979. Nadie puede ahora abrogar su vocería y mucho menos para actitudes sectarias o aventureras, o para hacerle el juego a Pastora.

La lucha en Centroamérica exige y exigirá múltiples formas de respaldo internacionalista contra la agresión imperialista. Somos los más entusiastas partidarios de impulsarlas.

Con este pronunciamiento nos sumamos a los llamados a las organizaciones obreras, democráticas y ant imperialistas para desplegar a escala internacional el decidido apoyo a quienes en Nicaragua y América Central enfrentan la opresión y la agresión.

Javier Múnera, Camilo González, Darío González

No. 1
Diciembre 1982
Enero 1983

La Batalla

Por la convergencia de los revolucionarios

Revista bimestral

del Partido Revolucionario de los Trabajadores

¡Adquírela!



Se prepara reunión del CC del PRT

El Comité Político del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) ha convocado a la realización de un pleno del Comité Central para los días 4, 5 y 6 de febrero. La reunión abordará diversos temas muy importantes, entre los que destacan un proyecto de resolución política que analiza la situación nacional y sus perspectivas; un análisis de la situación del movimiento obrero y las tareas hacia él; y el proyecto del partido de los revolucionarios. Igualmente, se realizarán discusiones sobre el trabajo del partido en el movimiento urbano y entre las mujeres, y se darán informes sobre

Bandera Socialista, La Batalla y la organización de la discusión interna en vistas al Duodécimo Congreso Mundial de la Cuarta Internacional.

Se realizó conferencia regional en Sonora

Los días 18 y 19 de diciembre de 1982 se llevó a cabo la Quinta Conferencia Regional del PRT en Sonora. La conferencia, que tuvo lugar en Hermosillo, contó en su inauguración con la presencia de representantes del Partido Obrero Socialista, de la Liga Obrera Marxista y de la Tendencia Proletaria Insurreccional de Chile. La reunión



discutió una resolución política y otra, organizativa, con las tareas que se imponen al partido en aquel estado. El partido constató igualmente el desarrollo tenido, especialmente después de la campaña electoral, a los niveles tanto geográfico —con representantes de la mayoría de las principales ciudades del estado— como social —sobre todo a través de la significativa presencia campesina, incluso de miembros de la tribu mayo a los que había que traducirlos.

El 62 por ciento de los asistentes a la conferencia eran hombres y el 38 por ciento, mujeres. Sus edades fluctuaban desde los 14 hasta los 70 años.

La conferencia, que además eligió a una nueva dirección regional, seguramente servirá para realizar mejor las enormes tareas que tiene frente a sí el partido en un estado donde el deterioro del Partido Revolucionario Institucional es de tal magnitud que ha permitido un imponente

avance electoral del Partido Acción Nacional. Todo lo cual exige el desarrollo de una alternativa proletaria creíble que ahí sólo el PRT puede ofrecer.

Nuevo local del PRT en Cuautitlán

El sábado 27 de noviembre se inauguró un nuevo local del PRT en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Es el segundo local en este municipio, después del establecido hace ya varios años en la Colonia La Aurora. El nuevo local se encuentra más centrado en el municipio, en la carretera Cuautitlán-México.

El acto de inauguración contó con la participación de Edgard Sánchez por parte del Comité Político del PRT, quien ofreció una conferencia sobre la concepción leninista del partido. El camarada Santos, dirigente de la organización en el municipio, tuvo a su cargo el discurso de inauguración, después del cual se ofreció ahí mismo una comida a los asistentes y se realizó la rifa de un libro.



BUZON

Nuestra sección de cartas, Buzón, es un foro abierto a los puntos de vista de nuestros lectores. Para evitar tener que resumir las cartas, sugerimos hacerlas lo más breves que sea posible. Indiquen si prefieren que usemos sus iniciales en vez de su nombre completo. Escribanos a nombre del Director, al Apartado Postal 111-007, CP 06880, DF, o entreguen sus cartas directamente en la redacción de BS, San Antonio Abad 254, tercer piso, teléfono 530 28 31.

Por qué fue asesinado el comisario ejidal Manuel Jesús Chan May

C. Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, Gral. Graciliano Alpuche Pinzón
C. Procurador
C. Delegado de la Reforma Agraria en el estado
C. Gerente
A la opinión pública

En relación al cobarde y salvaje asesinato del compañero Manuel Jesús Chan May y la versión que acerca de éste han venido difundiendo los medios de información, aclaramos:

El compañero Manuel Jesús Chan May fue secuestrado el día 28 de octubre por la noche en la terminal de autobuses de Valladolid, cuando llegaba de la ciudad de Mérida de una audiencia con el C. gobernador del estado en donde se le solicitó a éste su información para solucionar la privación ilegal de libertad de campesinos, entre los cuales se encontraba su hijo menor de edad, y el problema de las elecciones fraudulentas realizadas el día 26 para destituirlo arbitrariamente de su cargo, cuando apenas tenía un mes aproximadamente de haber sido electo mayoritariamente por la asamblea general de ejidatarios.

La asamblea donde se le destituyó de su cargo fue realizada con la asistencia de personas ajenas al ejido, dándoseles voz y voto por el jefe de la promotoría de la SRA [Secretaría de la Reforma Agraria] en Valladolid y no basándose en la lista de ejidatarios de la comunidad.

En la terminal lo esperaban el hijo del comerciante Luis Canché y otras personas que con el engaño de invitarlo a negociar la solución de los problemas de la población lo hicieron subir a una camioneta, llevándose primero a Kanxoc. En el trayecto fue golpeado y torturado. Posteriormente, al llegar al poblado, fue entregado a un grupo de 15 personas aproximadamente (y no de 200, como se ha publicado), las que de una manera salvaje y brutal lo asesinaron.

En la prensa se ha dicho que fue linchado por ser una persona corrupta, por no querer entregar la documentación al nuevo comisario y por reunirse secretamente en las madrugadas con grupos izquierdistas, o bien por rencillas políticas. Todo esto falso, pues en el corto tiempo que tenía como comisario ejidal no pudo ejercer su función por impedírselo el grupo de caciques, quienes mandaron golpearlo en dos ocasiones, además de encarcelarlo ilegalmente.

En cuanto a la documentación, no podía entregarla al ejido porque nunca la recibió de la SRA, y mucho menos del corrupto ex comisario ejidal Máximo May, quien tenía en su poder dicha documentación.

Por último, el compañero no era activista de ninguna organización o partido político y mucho menos se reunía en las madrugadas con grupos de activistas, aclarando que la Constitución de nuestro país establece y garantiza la libertad política.

El motivo real del asesinato del compañero fue el trabajar incansablemente por las mejoras en el ejido, mejoras que afectaron los intereses de un pequeño grupo de caciques integrado por comerciantes, ganaderos y transportistas.

Las mejoras por las que venía trabajando consistían en hacer que los ganaderos encerraran sus reses para que no continuaran destruyendo las milpas de los ejidatarios, a los que nunca les pagaron los daños. La solución favorable a los ejidatarios de este problema le ganó la enemistad de los ganaderos de la población.

Trabajó para que se pusiera la tienda campesina Conasupo-Copamir, lo que le granjeó la enemistad de los comerciantes.

Trabajó por que el crédito que manejaba el ex comisario ejidal Máximo May —quien lo destinaba a un pequeño grupo de sus allegados, de los cuales la mayor parte eran propietarios— llegara a todos los miembros del ejido.

Promovió la regularización de los problemas agrarios del ejido, es decir, la ampliación del ejido, el destinde de los terrenos ejidales, la expedición de certificados de derechos agrarios, etc.

Por los hechos arriba mencionados fue asesinado el compañero Manuel Jesús Chan May, y no por las falsedades publicadas. Comité Promotor pro Organización Popular del Sureste

Comunicado del Comité por la Organización Popular del Sureste

Los abajo firmantes, ejidatarios de la zona henequenera de Maxcanú, Yucatán, queremos por este medio hacer del conocimiento

público la situación que en estos momentos impera en Yucatán, donde las autoridades han anunciado el recorte de ejidatarios henequeneros (depuración) para enero próximo. Ante esto, creemos que es necesario manifestar nuestra opinión:

El campo henequenero está en crisis. La mala administración, y los intereses políticos y económicos que dominan en esta zona productiva, están ahorrando la producción del henequén e impiden un verdadero desarrollo de la diversificación agropecuaria, resultando de esto que más de 57 mil campesinos ejidatarios nos encontremos en la miseria.

Esta situación tiene viejas raíces. Comienza con la pérdida de nuestra historia a la llegada de los conquistadores españoles a nuestra península, la pérdida de nuestra libertad y de nuestras tierras. Fuimos animales perseguidos en el monte, esclavos, peones acasillados, todo, menos hombres libres de nuestro destino hasta que, unidos a la lucha de la revolución mexicana aquí, en Yucatán, con el general Alvarado, recuperamos nuestro derecho a la libertad. Entonces, organizados en ligas de la resistencia, construimos un partido de trabajadores del campo y la ciudad, el Socialista del Sureste, dirigido revolucionariamente por Felipe Carrillo Puerto. Con ello conquistamos nuestro derecho a la tierra. Con el asesinato de Felipe y el abandono de los principios revolucionarios por los dirigentes nacionales, nosotros, como otros campesinos del país, quedamos esperando con nuestra paciencia infinita que se hiciera justicia.

La llegada al gobierno nacional del general Lázaro Cárdenas nos trajo nuevas esperanzas. La creación del llamado "Gran Ejido" y la organización de la producción en "Henequeneros de Yucatán" nos hicieron volver a creer en nosotros mismos; desgraciadamente, nadie creía en nosotros, y lo que parecía el principio de nuestra libertad para decidir en nuestra propia tierra era el principio de un control de nuevo tipo sobre los mayas que cultivamos el henequén.

En esta época (1938-1955), el gobierno del estado se adjudicó la facultad de intervenir en los asuntos que sólo correspondían al ejido de acuerdo a la ley. Además, permitió la entrada a "Henequeneros" de los hacendados, quienes entraron disfrazados de pequeños propietarios. Después vendría la intervención directa del gobierno federal con el Banco Nacional, el Banco de Crédito, el Banco Agrario y, desde 1975, el Banco de Crédito Rural Peninsular (Banrural). Pero a pesar de todos estos cambios nuestra situación sigue siendo igual o peor: la corrupción y toda una serie de prácticas viciadas aumentan la injusticia e impiden que obtengamos nuestros derechos.

El henequén sigue siendo la planta del suelo yucateco. Las pocas posibilidades de otros cultivos en este suelo pedregoso, que nos den trabajo y sustento, hacen que defendamos la vida de nuestra planta.

Hoy, nuevamente se está preparando otro golpe contra el henequén. Una nueva depuración está esperando que comience el año '83 para sacar de la nómina a más de 25 mil de nosotros, condenados a la miseria, al hambre, a la enfermedad, además de violar nuestro derecho al trabajo (Artículo 123 constitucional).

La situación de estos días no está como para quedarse sin trabajo o dejar de recibir la miserable ganancia que nos paga el banco por los trabajos realizados en la línea de henequén, o quedar sin la pequeña cantidad que nos dan por la llamada diversificación agropecuaria y que, más bien, parece una limosna. Lo único que sabemos es que esos trabajos no son seguros, la experiencia así lo enseña.

¿Saben cuántos pozos, motobombas, tractores, potreros, pastizales, granjas porcinas y avícolas, hortalizas y otras inversiones están abandonadas en nuestras tierras? Y no las abandonamos los campesinos, sino el banco, que canceló proyectos, sacó a los animales de las unidades, vendió materiales y maquinaria, etc., dejando una millonaria inversión abandonada en medio de tanta necesidad que tenemos los humildes campesinos.

La corrupción está arriba. Oscuros intereses nos mantienen constantemente en la miseria y hoy quieren volver a aplastar al que está más abajo, pero que tiene más derecho que los que se han enriquecido y acumulado poder y puestos públicos, sirviéndose por nuestras espaldas.

"¡Tierra y libertad!" fue el llamado de Emiliano Zapata y Carrillo Puerto. Desgraciadamente, 73 años después vivimos épocas críticas, como las que vivieron nuestros abuelos con Porfirio Díaz y la Casta Divina.

Maxcanú, Yucatán, a 27 de diciembre de 1982



Noticias de la Cuarta Internacional

Resolución en apoyo al pueblo kurdo

En su reunión del pasado 10 de octubre, el Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional emitió la siguiente resolución en apoyo al pueblo kurdo:

El pueblo kurdo sufre una vez más los golpes de una represión feroz. En Turquía, el régimen militar apresa y tortura a centenares de militantes, desarrolla operaciones sangrientas contra las aldeas y asla a las zonas kurdas del resto del mundo.

En Iraq, los kurdos continúan siendo privados de sus derechos democráticos más elementales.

En Irán, se ha lanzado una ofensiva masiva contra los combatientes kurdos en el curso de los últimos meses. Las víctimas, en su gran mayoría civiles, se cuentan por miles.

La Cuarta Internacional apoya la lucha del pueblo kurdo por su autodeterminación, condena toda forma de represión ejercida contra los kurdos por los diferentes estados de la región y se une a la campaña por la defensa de los derechos democráticos más elementales del pueblo kurdo.

Declaración contra la condena a muerte de dos nacionalistas tamiés

Con motivo de la condena a muerte que han sufrido dos militantes nacionalistas tamiés, Kuttimati y Jegan, en Sri Lanka (antes Ceilán), el Buró del Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional emitió una declaración de protesta por este acto criminal del gobierno de ese país.

Los dos militantes fueron condenados a muerte sin que haya mediado un juicio, recurriendo a declaraciones obtenidas por la fuerza y la tortura, en el marco de la Ley de Prevención del Terrorismo. Con este acto se pretende legitimar la negación de los derechos del pueblo tamil, y se agreden de manera general las libertades democráticas de las masas oprimidas y explotadas de Sri Lanka.

Así se expresa en la declaración: "El Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional se manifiesta contra las condenas a muerte que pesan sobre Kuttimati y Jegan, y reclama la anulación inmediata de la sentencia de muerte contra los dos jóvenes tamiés, la liberación de los presos políticos y la abrogación de la Ley de Prevención del Terrorismo".

Libertad a Juan Islas y Carlos Valdés

El 13 de enero a las tres de la tarde fueron presentados ante las autoridades judiciales los militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) Carlos Valdés y Juan Islas, así como Rafael Lemus, amigo de la infancia del segundo. Se les acusa de intento de secuestro contra un industrial de Guadalajara y de portación de armas.

Los compañeros Islas y Valdés habían sido secuestrados en la Ciudad de México el 4 de enero, al regresar de unas vacaciones en Acapulco, Guerrero, por elementos policíacos que no se identificaron. El 7 de enero fue secuestrado Lemus, quien recientemente se había reunido con Juan Islas. El compañero Islas, además de la detención ilegal, fue víctima de brutales torturas y durante su secuestro fue trasladado a la ciudad de Guadalajara para ser interrogado.

Durante los nueve días que estuvieron desaparecidos Carlos y Juan—cinco en lo que toca a Rafael—, las autoridades correspondientes negaron que cualquier policía los tuviera detenidos. Los procuradores de justicia de los estados de Guerrero y Jalisco—donde vivía Juan Islas— también negaron

haber tenido algo que ver. Sin embargo, en el momento de la comparecencia de los compañeros, el coronel Sahagún Baca—Jefe de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD)—señaló que la presentación se había retrasado porque se trasladó a los detenidos a Guadalajara. En realidad, sólo Juan Islas fue llevado a esa ciudad; los otros dos compañeros permanecieron todo el tiempo en los macabros separos de la DIPD, donde aún se encuentran.

El caso es particularmente grave por estar detenido Juan Islas. El había sido amnistiado el pasado 1 de septiembre después de permanecer ocho años en la cárcel acusado por su militancia en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, una organización existente en el Estado de Guerrero en los años '70. Estando en la cárcel, el y Arturo Gallegos decidieron pedir su ingreso al PRT, el cual se hizo, con la colaboración del Frente Nacional contra la Represión (FNCR), una larga campaña por su libertad. Después de años de lucha, José López Portillo anunció su liberación en su último informe presidencial. Ahora, sin que mediara acusación formal alguna, es secuestrado.

En contra de la liberación de Islas y Gallegos siempre hubieron muchas presiones, especialmente de grupos empresariales ligados a Margarita Saad, una socia de Televisa de cuya muerte estaban acusados. Una vez liberados, Islas fue amenazado en varias ocasiones, especialmente a fines de noviembre y principios de diciembre del año pasado; incluso, sufrió un ataque a balazos en Guadalajara. Islas había denunciado estos hechos en la última sesión de 1982 del FNCR, antes de salir de vacaciones a Acapulco.

Desde luego, el PRT rechaza las acusaciones contra sus militantes como viles fabricaciones policíacas. Nuestro partido basa su actividad en la organización y la movilización políticas de los trabajadores para lograr sus demandas, y no en acciones aisladas del tipo de los secuestros. Nuestro accionar se realiza ante las masas para ganar su adhesión a la perspectiva socialista. Y es precisamente esto último lo que propicia la ira de la burguesía contra nuestros militantes.

Lo más grave es que una vez más se ha recurrido a la detención ilegal de personas por sus ideas políticas. La manera clandestina y, esa sí, terrorista en

que fueron secuestrados Islas, Valdés y Lemus representa un peligro tremendo para todos los trabajadores y movimientos de masas, pues significa que el propio gobierno no está dispuesto a respetar ni los derechos que sus propias leyes garantizan. Habrá que obligarlo.

Para protestar por el secuestro de los compañeros Islas, Valdés y Lemus, el PRT realizó el mismo día 13 un mitin frente a la Secretaría de Gobernación al que asistieron cientos de personas. Tomaron la palabra en el acto Pedro Peñaloza, del PRT; un representante del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla; la madre de Carlos, Ruth Martín de Valdés; Sara Duarte, del FNCR; Eduardo Guzmán, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México; René Rojas, del Partido Obrero Socialista; Felipe Espinoza, de la Liga Obrera Marxista; un representante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui; y un representante de la Colonia Lázaro Cárdenas del Estado de México.

El régimen de la "renovación moral" se está estrenando. En menos de cuarenta días de gobierno de Miguel de la Madrid, han sido asesinados dos militantes del Partido Socialista Unificado de México, y han sido detenidos arbitrariamente dos miembros del PRT y una persona cuya vinculación con ellos se limita a una amistad de la infancia. Lejos de presentar a los desaparecidos, el nuevo régimen reincide en la práctica de los secuestros por motivos políticos.

El gobierno de Miguel de la Madrid tiene en sus manos la decisión. Continuar o no por ese curso.



Juan Islas



Carlos Valdés

Crecen las protestas

El secuestro el 4 de enero de Juan Islas y Carlos Valdés, miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), y de Rafael Lemus el día 7, a manos de policías no identificados, ha originado de inmediato muchas protestas.

En una declaración oficial de la Universidad Autónoma de Guerrero, ésta "hace pública su indignación por la realización de este tipo de actos represivos que violan los más elementales derechos humanos". El 10 de enero, el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, "preocupado por el respeto cabal de los derechos humanos y políticos por parte de las autoridades gubernamentales del país, manifiesta su profunda indignación por el secuestro policiaco del que fueron víctimas los compañeros Carlos Valdés y Juan Islas (este último, recientemente amnistiado), ambos militantes del PRT". En términos similares se pronunciaron las organizaciones que conforman el Frente Nacional contra la Represión (FNCR).

Prácticamente en todos los periódicos nacionales se han publicado pronunciamientos o comentarios sobre el secuestro de los miembros del PRT. Especial difusión se ha ofrecido a las denuncias presentadas por la madre de Carlos Valdés.

Entre los muchos comentarios, que incluyen por cierto el

realizado por Tomás Mojarro en su programa de televisión, destaca el artículo del conocido editorialista Manuel Buendía publicado en *Excelsior* el 12 de enero.

Buendía señala la coincidencia en el tiempo de los secuestros de Beatriz Eugenia y Cristina Alcaine Herrera en San Salvador, y de Juan Islas y Carlos Valdés en la Ciudad de México. La coincidencia termina ahí, pues Buendía señala cómo, a fines de la semana pasada, el gobierno de El Salvador reconoció que la temible Policía de Hacienda de ese país había secuestrado a las hermanas Alcaine, mientras que una semana después de los hechos el gobierno mexicano se negaba a dar cualquier información.

Concluía Buendía con la siguiente observación: "Sería injusto y bastante estúpido afirmar que Miguel de la Madrid fue consultado acerca de la detención de esos dos militantes políticos. Pero ocho días después ya no puede ignorar lo ocurrido. Y todas las policías que secretamente ejecutan la represión—esto incluye una buena colección en provincia—están pendientes de los labios del Primer Mandatario. De lo que él diga depende si continúan o no las desapariciones. Por lo pronto ya empezaron. No es una conjetura. Es sólo una sencilla prueba que el viejo sistema le pone al nuevo Presidente".

Un caso más de represión en Guanajuato

Por J. José Arreola D. VALLE DE SANTIAGO, Gto.—El pasado mes de octubre fue detenido arbitrariamente Antonio Martínez Jiménez en la ciudad de Yuriria, Guanajuato, por la Policía Judicial del Estado. Esta detención se suma a la ya larga lista de casos de represión del régimen mexicano contra los militantes democráticos.

Antonio Martínez es miembro de la Alianza Campesina Revolucionaria (ACR) y habitante de la colonia popular llamada "El Campamento", en Valle de Santiago.

El hoy preso político es acusado "legalmente" de haber dado muerte al pistolero Víctor Godoy Godínez—del mismo poblado—, a pesar de haberse de-

mostrado que el día de la muerte de esta persona Antonio se encontraba a mucha distancia del lugar de los hechos. Asimismo, contradictoriamente, el día de su detención (17 de octubre) se le acusó de contrabandista, ladrón y "desconocido".

Después de haber sido golpeado por elementos de la judicial de Yuriria en la oficina de la misma dependencia, fue conducido a la ciudad de Guanajuato para dictársele acto de formal prisión, sin aún haber hecho declaración alguna. Sin embargo, esa misma tarde y ya de vuelta a Valle de Santiago, el Ministerio Público del estado lo obligó a firmar bajo amenaza "su" declaración, en donde "confiesa" haber cometido el asesinato.

Un elemento más que demuestra lo amañado del proceso lo constituyeron las declaraciones de los "testigos" en el caso: el 23 de noviembre. Allí, dos de ellos se retractaron de la acusación y afirmaron no saber nada del caso.

La raíz del problema, que aún sigue latente, es la existencia de un grupo contrario a la mayoría de los colonos, que para hacerse oír ha echado mano de la agresión, inclusive con armas de fuego—como sucedió el 27 de julio, cuando varios habitantes de la colonia fueron hostigados con disparos de rifle.

Este grupo, que está encabezado por la licenciada Catalina Puga, ha provocado constantes balaceras para amedrentar a los colonos y sujetarlos a sus decisiones.

La Regional Guanajuato del Partido Revolucionario de los Trabajadores exige la libertad inmediata del compañero Antonio Martínez, el esclarecimiento de los hechos por parte del gobierno estatal, y el cese a la represión y los hostigamientos por parte del grupo de pistoleros de Catalina Puga.

Militantes del PSUM asesinados

Por Ulises Martínez Flores

En clara contradicción con los planteamientos expuestos, al momento de iniciar su mandato en torno al impulso de la democracia en el interior de las organizaciones políticas y sociales, el gobierno de Miguel de la Madrid ha iniciado, a lo largo y ancho del país, una peligrosa escalada represiva contra los movimientos populares y los partidos de oposición.

En el caso de los movimientos populares, destaca por su gravedad la represión a la comunidad de Villa Flores, en Chiapas, con la que el gobierno culminó el proceso de imposición de las autoridades municipales, así como la solución represiva por la que se ha optado en otros conflictos electorales en diversos municipios del país.

En cuanto a los ataques a los partidos políticos, la detención de dos militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) (que reseñamos en nota aparte) y el asesinato de dos dirigentes regionales del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) ejemplifican los intentos del gobierno por obstruir la actividad política que venimos desarrollando.

El 4 de enero pasado fue asesinado el compañero Quinciano Álvarez en el ejido La Unión del Municipio de Palenque, Chiapas. Quinciano Álvarez era secretario general del Comité Zonal de Palenque del PSUM. Su actividad en la región lo había convertido en un claro opositor de los caciques, a quienes responsabilizaban de su asesinato.

El 12 de enero, un militante más del PSUM, Rosario Uzárrega, fue víctima de esta escalada represiva, en esta ocasión en el ejido Tulpitas, de Guamuchil, Sinaloa. El asesinato de Rosario Uzárrega y de su hijo Alejo fue realizado por miembros de las policías judicial y municipal al momento en que se llevaba a cabo en ese lugar el desalojo de 120 familias.

Ante la represión que el gobierno pretende desarrollar contra todos los sectores de la población trabajadora, el conjunto de las fuerzas democráticas y revolucionarias del país debemos cerrar filas y exigir en forma unitaria al gobierno federal y a los gobiernos estatales el respeto a las libertades democráticas y el cese de la represión.

Detrás de los asesinatos de menores La verdadera cara de la policía

Por Manuel Acosta

En las últimas semanas, la opinión pública se ha visto conmovida por los asesinatos de varios menores a manos de ex agentes de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa. Independientemente de lo reprochable del hecho por sí mismo, el caso de estos secuestros y asesinatos encierra algo más.

Quien estuviera al frente de la banda de criminales, Aureliano Rivera Yarahuan, y cinco supuestos cómplices habían sido jefe de la policía judicial de Sinaloa y agentes de la misma, respectivamente. Coincidentemente, Sinaloa es uno de los estados donde se han realizado numerosos secuestros por motivos políticos, particularmente en el periodo en el cual Rivera Yarahuan se encontraba en plenas funciones. El hecho de que un ex jefe de servicios policíacos se halle inmiscuido en secuestros y asesinatos de menores no es algo impensable, ya que el adiestramiento y las funciones que éstos cumplen en relación a la represión contra la población, y particularmente contra los militantes políticos y sindicales, involucran, entre otras prácticas, secuestros y asesinatos completamente ilegales, pero con la cobertura y el apoyo del régimen.

Aureliano Rivera contaba desde octubre de 1981 con un permiso con goce de sueldo, ya que debía recibir tratamiento por las secuelas causadas por heridas sufridas en un enfrentamiento con asaltantes bancarios en Sinaloa; es decir, se reintegraría posteriormente a sus funciones.

Al hacerse públicos los casos de los secuestros y tras el conocimiento del asesinato de Miguel Arizmendi, la prensa burguesa y los noticieros de televisión, en particular los de Televisa, se hicieron eco de una campaña amarillista con el objeto de reintroducir la pena de muerte o mayores condenas para los culpables de estos delitos. El resultado de la investigación vino a dar un revés a esta intencionalidad, por hallarse involucrados

en los asesinatos varios ex agentes de la policía judicial. Sin duda, ésta es la razón por la cual los agentes de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD) optaron por matar a los dos cabecillas de la banda, Aureliano Rivera Yarahuan y su esposa—como se infiere de las declaraciones del Director del Servicio Médico Forense de que incluso recibieron el tiro de gracia—, antes de tener que enfrentar un proceso en el cual se juzgara no sólo a los responsables individuales de los plagios, sino también a las propias corporaciones policíacas y al sistema de justicia vigente.

El hecho de que un ex jefe de un cuerpo policíaco y agentes del mismo estuvieran involucrados en acciones delictivas como la que señalamos muestra una vez más que los principales promotores de la violencia se encuentran entre quienes pretenden combatirla en nombre de la sociedad.

Los asesinatos y secuestros de menores a manos de ex agentes o policías en activo no son nuevos o casuales. Constituyen una práctica corriente del régimen y de la cual son un ejemplo los más de 500 desaparecidos por motivos políticos. Entre éstos, por cierto, se encuentra un niño de dos años, desaparecido en Puebla e hijo de Bulmaro Vega—miembro de una organización combativa de vendedores ambulantes—; igualmente, el hijo de diez años de Trinidad Cue Torres y Ramón Campaña—recientemente amnistiados—fue secuestrado y luego asesinado por los órganos policíacos en Los Angeles, California, a donde sus padres lo habían enviado para tratar de protegerlo.

El esclarecimiento de las muertes—que esta vez, por no deberse a motivos políticos, han sido del dominio público—ha evidenciado el verdadero carácter de los organismos policíacos, en cuyas cúpulas se encuentran asesinos y enfermos.